

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 4, capítulo XXXI

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
María del Carmen Berdejo Bravo

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 4, capítulo XXXI

**Anotado y revisado por
María del Carmen Berdejo Bravo
(UAM Azcapotzalco)**

Capítulo XXXI

**Lamentable polémica
Ocampo - Lerdo de Tejada**

Enero - Febrero de 1861

CAPÍTULO XXXI

LAMENTABLE POLÉMICA OCAMPO-LERDO DE TEJADA

Enero - Febrero de 1861

De acuerdo con la convocatoria a elecciones para designar residente de la República surgieron como candidatos Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y Jesús González Ortega.

Los amigos de Lerdo de Tejada desde el diario *El Herald* iniciaron una intensa campaña a su favor presentándolo como el promotor y autor prácticamente exclusivo de las Leyes de Reforma.

El 18 de enero apareció en ese periódico un artículo francamente agresivo contra el gobierno, tomando como pretexto el indulto a Isidro Díaz.

Melchor Ocampo, que hacía dos días había renunciado al puesto de ministro de Hacienda, envió a *La Tribuna*, el 19 de enero, un violento remitido contra Miguel Lerdo de Tejada, a quien acusa de graves cargos políticos tales como no haber luchado en determinadas épocas, desconfiar del triunfo militar "sin traer americanos armados", entender la Reforma sólo como "la ocupación de los bienes del culto".

Es indudable que Ocampo perdió los estribos, pues el remitido es agresivo y francamente opuesto a la candidatura de Lerdo de Tejada.

El acusado contestó de inmediato el 21 de enero; en él se muestra enérgico, también agresivo, pero dueño de sí: haciendo gala de método y lógica resume las acusaciones en tres y emplaza a Ocampo a probar sus cargos.

Sin embargo, dos días después envía otro nuevo remitido a los periódicos reconociendo que, por la precipitación con que escribió, omitió incluir otros dos cargos que Ocampo le indilga y pide al michoacano que, al fundar sus acusaciones, se refiera a los cinco puntos señalados.

No pasan muchos días y el 26 de enero, sobre la rodilla, Ocampo contesta la interpelación de Lerdo, en el mismo tono de violencia y anuncia que, tan luego le llegue su equipaje de Veracruz, publicará documentos que probarán sus afirmaciones.

Mientras tanto *El Herald* también terció en la discusión y presentó los días 20, 22, 23 y 25 de enero violentos editoriales que se reproducen en las páginas siguientes, haciendo la defensa de Lerdo de Tejada y criticando duramente a Juárez y a sus ministros en Veracruz.

Manuel Ruiz, condiscípulo de Juárez, colaborador en el gobierno de Oaxaca y ministro de Justicia en Veracruz, no quiso quedar callado y también quebró una lanza en la disputa, con un remitido a *La Tribuna* del 15 de febrero en que hace detallado examen de los antecedentes de las Leyes de Reforma y de la génesis de cada una de ellas.

Acaso por no ser actor en la polémica, su intervención, aunque apoya a Ocampo, es reposada, metódica, bien escrita y, con una secuencia lógica que convence, precisa la intervención real de Lerdo de Tejada en la preparación de las Leyes de Reforma.

Ocampo espera, con calma, que llegue su equipaje y el 28 de febrero envía a *La Tribuna* la exposición que, por instrucciones del Presidente Juárez preparó en Veracruz el 22 de octubre de 1859, para reunir los antecedentes sobre las leyes de desamortización primero y nacionalización después de los bienes del clero. Junto con ella publica otra violenta carta en que comenta los editoriales de *El Herald* y da una nueva felpa a su contrincante.

Por lo que hace a la exposición, es un notable documento en que Ocampo hace gala de erudición, buen juicio y cabal conocimiento del problema.

La tesis de que gran parte de los bienes no eran del clero, sino de nadie es impresionante, así también como el examen de la aplicación de

la ley de desamortización y de los inconvenientes de la ley de nacionalización y la necesidad que se tuvo de reformarla y adaptarla por medio de circulares.

Son valientes y fundados algunos de los juicios sobre las consecuencias económicas de la independencia y la conducta del clero.

Lerdo murió unas semanas después, 22 de marzo, y la controversia tuvo que suspenderse, pero sus consecuencias fueron desfavorables para la causa progresista.

Se abrió una amplia grieta en el mundo liberal, precisamente en el momento en que era necesaria la unión y solidaridad en torno del gobierno. Se había triunfado militarmente, pero era necesario poner en marcha la Reforma aplicando las leyes expedidas en Veracruz y complementándolas con otras de tipo reglamentario.

Se exhibió también la precipitación y falta de estudio en la formulación de algunas de esas leyes, precisamente las de carácter económico.

El saldo de esta controversia fue necesariamente negativo; pese a que Lerdo no se defendió de los cargos, su repentina muerte lo liberó; en cambio, Ocampo, amargado, decepcionado y triste, se refugió en Michoacán, en su finca Pomoca.

Juárez no fue actor en la disputa pero recibió duros golpes en ella y, lo más sensible, su gobierno se debilitó con esta exhibición de los acontecimientos tras las bambalinas del escenario de Veracruz.

Desde principios de marzo, Miguel Lerdo de Tejada cayó en cama víctima de un mal que de momento no se pensó fuera mortal; el 14 de ese mes *El Herald* anunció por primera vez su enfermedad, pero sin considerarla de cuidado; el 20 siguiente, el mismo periódico hacía saber que estaba en mejoría, parece fue tifoidea lo que le atacó.

El 22 de marzo a las dos de la tarde murió en Tacubaya, con gran sentimiento de los liberales pues era generalmente respetado por su talento y decidida actitud progresista, aun por aquellos con los que tenía diferencias o eran ocasionales opositores por la campaña electoral.

Inmediatamente el gobierno tomó a su cargo el embalsamamiento de su cadáver y los funerales, trasladándose el cuerpo a su domicilio en México, donde se instaló la capilla ardiente.

Se decretaron honras fúnebres y grandes honores en razón de sus servicios a la Reforma y, además, se destacó que era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue sepultado el 26 de marzo, asistiendo al sepelio el Presidente Juárez y todos los miembros de su gabinete y numerosa concurrencia.

En el panteón un sacerdote rezó responsos llevándose a cabo algunas ceremonias religiosas y, finalmente, pronunciaron sendas oraciones fúnebres Manuel M. de Zamacona y Florencio M. del Castillo.

Por desgracia, el partido liberal sufrió también otra gran pérdida con la muerte del gobernador de Veracruz, Manuel Gutiérrez Zamora, el 21 de marzo anterior, la que tuvo lugar en el puerto de Veracruz.

DOCUMENTOS

Enero - febrero de 1861

AMNISTÍA

Editorial de *El Siglo Diez y Nueve* del 18 de enero de 1861

Circula un rumor grave, alarmante, que, a ser cierto, sería el desprestigio del gobierno y la perdición del país.

Se dice que se ha concedido indulto a don Isidro Díaz y que se va a dar una amnistía en favor de los reaccionarios.

Si esto sucede, adiós justicia, adiós libertad, adiós orden pública. No se cortará la serie de motines y asonadas y el país desesperado, desencantado, sin fe y sin esperanza, renegará de sus esfuerzos, maldecirá sus sacrificios y se perderá en las convulsiones de la anarquía.

Decíamos ayer que el escritor político no debe esquivar ninguna cuestión grave por nimias consideraciones. Fuimos siempre y somos todavía, partidarios ardientes de la abolición de la pena de muerte, pero creemos también que las leyes deben cumplirse y que sin esto, todo es mentira.

No clamamos venganza, no queremos represalias, no abrigamos rencor contra nuestros adversarios, pero sí puede haber clemencia contra los errores, olvido y tolerancias para las opiniones políticas; la impunidad para los crímenes del orden común desmoraliza la sociedad e importa una complicidad en los que, al concederla, violan la ley y faltan a la justicia.

El rumor alarma y con razón. Cuando el Senado indultaba a los asesinos de Béistegui, la opinión pública reprobaba este perdón, porque se temía que las gentes de México que pasean en carretela por los alrededores, pudieran ser robadas, pues el homicidio había sido casual y no premeditado.

Cuando hace pocos días se nos ofreció en la plaza el espectáculo de fusilar a un desdichado que se había robado un caballo y a otro, por otra bagatela, la opinión calló, porque vio en esto, un preludio de justicia

y porque recordó el asalto de la calle de Capuchinas y el saqueo de Palacio, en la noche triste de la reacción.

Cuando se dio el decreto que despide al ejército permanente, la opinión aplaudió, no por los cabos y sargentos, sino por los bandidos y asesinos que se han llamado generales, gobernadores, ministros y presidentes, a la sombra del bando clerical.

Cuando el señor Ocampo ha despedido a todos los empleados que sirvieron a la reacción, apenas ha habido quien oiga los clamores del hambre de esas pobres gentes que nada valen, pero que han contribuido a nuestros males tan pasivamente como los tinteros y las plumas de las oficinas. Se creyó que esto anunciaba una lección severa para los tráfugas, para los tornadizos, para los liberales de la víspera y para los liberales del día siguiente.

Haya, en hora buena, olvido, lástima, desdén, para esa turba que se llama gente decente y llevaba sus felicitaciones a Zuloaga, para esas pobres mujeres que por conseguir destino para sus padres o maridos, iban de gala a hablar de teología a los salones de Palacio, para esa canalla que todo lo sabe sufrir y todo lo sabe aplaudir por un pedazo de pan. No es posible, no es ni siquiera necesario castigar a esa parte degradada y envilecida de la sociedad. Para que hubiera un Nerón, preciso fue que hubiera un Senado que admitiera como cónsul a su caballo, sacerdotes que sancionaron sus bodas con su esclavo y un pueblo que, en la embriaguez de la orgía, aplaudiera el incendio de Roma. La tiranía no existe por sí sola, necesita de cómplices, de esbirros, de viles y cobardes.

Pero esta escoria lo aplaude todo, lo tolera todo y aquí los esbirros de ayer, porque había esbirros en las Magistraturas y en las altas regiones, son más liberales que nadie. Sea en hora buena, pero el país no aceptará, no tolerará esa amnistía que se anuncia porque quiere justicia, porque está cansado ya de ósculos de Judas y de perfidia porque anhela la paz, el orden, la moralidad y porque no puede considerar como delitos políticos, el perjurio y la traición de los autores del golpe de Estado, ni el motín de Tacubaya ni la serie toda de robos, de estafas, de asaltos, de asesinatos, de saqueos, de incendios perpetrados por la reacción.

Ha habido dudas y vacilaciones para sacar de las cárceles a algunos infelices que aún ignoran de qué los acusaba la reacción y habrá amnistía para los asesinos de Herrera y Cairo, para los verdugos de Tacubaya, para los azotadores de mujeres de Oaxaca.

Esto no puede ser. Esta impunidad sería inicua, sería injusta, traería consigo la perdición del país.

La opinión pública no quiere sangre ni suplicios, no clama venganza porque anhela justicia, justicia severa, imparcial, completa, pronunciada por los tribunales conforme a las leyes.

Cierto es que la justicia se puede ejercer con misericordia y que nuestra Constitución reserva al jefe del Ejecutivo la facultad de perdonar, pero es menester que este perdón no sea un escándalo, ni un atentado contra la sociedad entera.

Aunque no creemos que sean cosas acordadas el indulto y la amnistía, hemos creído de nuestro deber expresar la impresión que tal rumor ha causado en el público y nuestro modo de ver esta cuestión y esperamos que hoy se aclare la verdad y que el gobierno que cuenta con la opinión pública, no se separe de ella, hiriéndolo en lo más vivo.

Francisco Zarco

AMNISTÍA

Editorial de *El Herald*

En nuestro número anterior dimos cuenta, aunque muy a la ligera, de los rumores que circulaban y que habían causado una honda sensación en los liberales que, después de haber sufrido toda clase de males, de haber expuesto sus vidas, desean que la paz se consolide con el desarrollo de la Reforma, con el restablecimiento de la moral, con la creación de la hacienda que no tenemos para que a su sombra florezca y llegue a ser grande este hermoso pero, hasta ahora, desventurado país.

En efecto, la amnistía, perdón o conmutación de pena en destierro por cinco o más años de don Isidro Díaz, el amigo íntimo, el consejero de mayor confianza, de mayor influencia de Miramón, importa la amnistía para todos los ministros de los dos presidentes farsantes, importa el olvido para todos los criminales de los robos, de los incendios, de los asesinatos que cometieron.

No vaya a creerse que nosotros somos partidarios de la pena de muerte, ni la pidamos; nosotros hemos alzado nuestra voz y la alzamos de nuevo y la alzaremos hasta que se nos extinga, pidiendo justicia, reclamando el cumplimiento de las leyes expedidas ya y que el gobierno no tiene facultades para interpretar a su antojo.

Se cree que los hombres que durante tres años han estado nadando en un mar de sangre, que todo lo han hollado, que no respetaron los sellos de la Legación de una nación amiga y, a la luz del día, sin misterio, sin embozo, rompieron las puertas de la pieza donde estaba la caja que contenía los caudales pertenecientes a súbditos ingleses, cuyo depósito se hallaba resguardado por la bandera de su nación, bandera que así como la de todas las naciones civilizadas debe ser y es respetada en todo pueblo civilizado. ¿Se cree, por un momento, que esos hombres se mantendrían

tranquilos en el extranjero? ¿Qué hizo en todos tiempos Santa Anna? ¿Qué hicieron en todos tiempos los amigos de ese funesto personaje? Conspirar de día, conspirar a la sombra de la noche, diferentes veces con éxito feliz para ellos y desgraciado para la República.

Miramón, que figuró en escala tan elevada, cuando menos debía esperarlo, porque ningunos servicios había prestado, porque ningún talento había demostrado; Miramón, joven presumido, adulado, enriquecido a costa de la nación, pudiendo proporcionarse toda clase de goces; sus colaboradores en la obra de destrucción, esos hombres que saltaron por cuantas consideraciones se tienen presentes en sociedad ¿supónese por un momento que se mantendrán tranquilos espectadores de lo que pasa en el país, sin procurar arrojarle la tea de la discordia, que encontrará combustible abundante entre los descontentos que no serán pocos, porque el número de los ambiciosos, de los que creen merecerlo todo y desean medrar a costa del pueblo es grande? No y mil veces no; esos hombres que han mantenido a la patria humillada durante tres años, que han mandado despóticamente, que se han enriquecido, conspirarán y conspirarán hasta causar un nuevo desorden, que lleve al matadero a otros mexicanos y que impida se mantenga inalterable la paz tan necesaria.

La amnistía en estos momentos a nada conduciría, contrayéndose, como debe contraerse, a los agentes secundarios de la revolución. Éstos, sin necesidad de amnistía, se presentan en todas partes y no seremos nosotros los que aconsejemos sean perseguidos, porque esos individuos o no tuvieron valor o no tuvieron simpatías para lanzarse a la revolución o, en su calidad de subalternos, obedecieron las órdenes de sus superiores. El mismo señor presidente lo ha dicho en su Manifiesto al entrar en esta capital. La promesa hecha entonces debe cumplirse.

Lo que está pasando, sin embargo de ser inesperado para muchos, no lo es para nosotros, que conocemos los elementos de que está compuesto el ministerio y cuyas medidas, faltas de acierto, de energía, sin la debida meditación, esperábamos. Por eso, desde el primer día que reapareció nuestro periódico, muerto por la firmeza con que sostuvo los principios proclamados y la legalidad, acogimos la idea de pedir el

cambio de ministerio, idea que teníamos formada y que comunicamos a varios de nuestros amigos.

El señor presidente debe dar oído a la opinión pública que se muestra no satisfecha de la marcha que se está siguiendo, pues, aun los negocios en los que nos sobra la razón, la falta de tacto, de circunspección al resolverlos, puede hacérselos perder.

NUESTRO CANDIDATO
PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Editorial de *El Herald* ¹

Apareció los días 20, 22, 23 y 25 de enero de 1861

II

Sabemos que los trabajos que en ese sentido emprendió entonces el señor Lerdo, no se limitaban a la capital, sino que se extendían a procurar que algunas de las fuerzas del interior se aproximaran a ella, con el objeto de favorecer y asegurar el cambio que se deseaba. Con este fin escribió y envió comisionados al interior y, aunque no consiguió que sus indicaciones se realizaran en todas sus partes, la expedición del señor general don Miguel Blanco, que se presentó en esta capital en octubre de 58, con fuerzas de Nuevo León y Michoacán, fue resultado de aquellos pasos y todos pueden todavía recordar que si esa expedición no llegó a derrocar el ridículo y odioso poder de Zuloaga, esto dependió de haber faltado la combinación en los momentos más preciosos a consecuencia de haber marchado violentamente aquellas tropas hacia México el mismo día en que el señor Lerdo, suponiéndolas, como tenía razón de suponerlas, en las inmediaciones de Toluca, marchaba a su encuentro.

Malograda aquella expedición del modo que recordarán los habitantes de esta capital y obligado a alejarse de ella, todavía insistió el señor Lerdo en la hacienda de la Huerta y en Zitácuaro para que se intentase la ocupación de Toluca y mantuviese así en alarma a las tropas

¹ No hemos podido consultar el ejemplar del 20 de enero en que apareció la parte I de este editorial, pese a nuestra búsqueda en la Hemeroteca Nacional, Biblioteca del Congreso en Washington, Biblioteca de la Universidad de Texas y colecciones particulares.

reaccionarias que guarnecían la capital; pero todos sus pasos en ese sentido quedaron frustrados por el desacuerdo que reinaba entre los jefes de las fuerzas que componían la expedición y, en vista de esto se determinó a pasar a Morelia, habiendo recibido para ello, una amistosa invitación del señor general Huerta, gobernador del estado de Michoacán.

Muy cerca de un mes permaneció en aquella ciudad el señor Lerdo, esperando que la fuerza acaudillada entonces por el señor Degollado, que acababa de tomar la plaza de Guadalajara, marcharía sobre México, en cuyo caso se proponía unirse a ella en el tránsito, pero, no habiendo tenido esto efecto y recibiendo el señor Lerdo por aquellos días una carta de don B. Gómez Farias en la que a nombre del señor Degollado le manifestaba la conveniencia de que se trasladase a aquel punto, no vaciló un momento en verificarlo, a pesar de estar entonces atacando el Puente el general Márquez y, pocos días después de hecha aquella invitación, se encontraba nuestro candidato en Guadalajara.

En las primeras conferencias que tuvo allí con el señor Degollado, habiéndole manifestado éste las dificultades con que tropezaba para proporcionarse recursos bastantes para atender a los multiplicados gastos de la campaña, redactó y le presentó el señor Lerdo, el decreto que con fecha 7 de diciembre de 58, expidió aquel jefe, en su carácter de ministro de la Guerra y basta leer los considerandos y los preceptos de aquella disposición para comprender, por una parte, la fijeza de las ideas del señor Lerdo sobre las verdaderas causas de la sangrienta lucha que aniquilaba a la nación y, por otra, el buen servicio que prestó al partido de la libertad y del orden legal, autorizando a los gobernadores de los estados para sacar de los bienes del clero, sumas iguales a las que éste había proporcionado y en lo sucesivo proporcionase al bando reaccionario.

Pocos días después de expedido aquel decreto, teniendo nuestras fuerzas que abandonar a Guadalajara, a consecuencia de haber logrado Miramón vencer el paso del Río Grande por Poncitlán, se trasladó el señor Lerdo a Zacatecas y, durante el corto tiempo que permaneció en aquella ciudad, ocupado constantemente su pensamiento en dar a la guerra una dirección conveniente para asegurar el triunfo de los buenos

principios, a fin de que esta vez no fueran estériles tantos sacrificios y tanta sangre, redactó el programa que debía adoptarse por el partido liberal, en el que no sólo se resolvía la gran cuestión de la reforma del clero, origen de la lucha, sino que se fijaba la marcha que un gobierno ilustrado debía seguir en todos los ramos de la administración pública, cuyo documento, como veremos más adelante, se convirtió, con pocas variaciones, en un manifiesto del gobierno constitucional en Veracruz.

Amagada por aquellos días la ciudad de Zacatecas por fuerzas reaccionarias y, no teniendo el señor Lerdo objeto alguno en permanecer allí, se puso en marcha hacia Monterrey, donde se proponía trabajar en lo que estuviere de su parte para que aquel estado, que tan buenos servicios había prestado antes a la causa de la libertad, continuara sus patrióticos esfuerzos; pero, ya en camino, pensó que en aquellos momentos podía ser más útil su presencia en Veracruz y, variando de ruta, se dirigió hacia Tampico, de donde se trasladó inmediatamente a aquel puerto, amagado entonces por las tropas de Miramón que bajaba de México con objeto de atacarlo.

Al día siguiente de su llegada a Veracruz, fue invitado el señor Lerdo para encargarse de las secretarías de Hacienda y Fomento; mas, siguiendo entonces dicho señor el principio que siempre ha observado sobre no considerar los puestos públicos como un objeto de aspiración personal, sino como un medio para realizar una idea en favor de la sociedad, manifestó desde luego que no tenía inconveniente en tomar parte en el gobierno, sobre todo en aquellos momentos, pero que para que su cooperación fuera de alguna utilidad, era indispensable que se viera precisamente si sus opiniones sobre las exigencias de la situación estaban o no de acuerdo con las del gabinete.

Para este fin, leyó el señor Lerdo, ante el presidente y sus ministros, el programa que había escrito en Zacatecas y, aunque la lectura de ese documento provocó algunas discusiones, particularmente en lo relativo a la nacionalización de los bienes llamados del clero, sobre cuyo punto encontró oposición en todo el gabinete, fue aceptado en lo general, manifestándose al cabo que aun en ese punto cuestionado había

conformidad en el fin, si bien se difería en los medios y, en tal virtud, tomó desde luego a su cargo el señor Lerdo las dos indicadas secretarías.

Por la circunstancia de hallarnos nosotros entonces en Veracruz - febrero de 1859- tuvimos ocasión de notar el buen efecto que produjo en favor del gobierno constitucional el ingreso del señor Lerdo al gabinete y, lo mismo que nosotros, todos los habitantes de aquel puerto pueden recordar que, a pesar de que los momentos eran los menos a propósito para hacer frente a las multiplicadas atenciones de una plaza amagada de un próximo ataque, ya porque acababan de ajustarse los convenios celebrados con los jefes de las fuerzas navales de Inglaterra y Francia, que redujeron a menos de la mitad los productos de la aduana y ya por la desconfianza que un peligro inmediato infundía en el comercio para hacer anticipaciones de derechos al gobierno, el señor Lerdo, procurando reducir los descuentos y estableciendo el orden posible en los gastos, obtuvo los recursos suficientes para que nada de cuanto era necesario dejara de hacerse, como se hizo.

Además de estos trabajos especiales del ramo de Hacienda, juzgando el señor Lerdo que en aquellos mismos días en que el bando reaccionario se jactaba neciamente del triunfo que soñaba alcanzar en Veracruz y cuando sus asalariados escritores se afanaban en hacer aparecer al gobierno en aquel puerto completamente amilanado y buscando su única salvación en una vergonzosa fuga, era conveniente dar una muestra de vida y presentar audazmente al público nuestros principios, desplegando con ellos a todo viento los hermosos colores de la bandera que lleva triunfante por todas partes el gran partido de la libertad y de la civilización, hizo imprimir en forma de circular a los gobernadores de los estados el programa presentado por el gobierno, pero el señor Juárez se opuso a su circulación por no creerlo conforme con la Constitución.

Desechado así este pensamiento, lo mismo que otros dos proyectos que en aquellos días presentó el señor Lerdo, uno relativo al establecimiento de la Tesorería general en Veracruz y otro sobre conductas de caudales, nos consta que tenía la idea de retirarse del gabinete y que sólo por la consideración del mal efecto que pudiera

causar su retirada en aquellos momentos y por las demostraciones que en este sentido le hacían sus amigos, se resolvió a continuar en el puesto y esperar otra oportunidad para realizar lo que entonces no había podido conseguir.

Después del horrible descalabro que sufrió el señor Degollado en Tacubaya el 11 de abril de 1859, juzgando el señor Lerdo que era llegada la oportunidad de volver a tratar de su pensamiento y, apoyándose en las indicaciones que se dirigían por algunos amigos de esta capital, insistió en la idea de que se expidiese aquel programa y las leyes relativas a la Reforma del clero; pero tampoco esta vez logró su objeto, porque a pesar de que se discutió en el gabinete este pensamiento, luego que pasaron las primeras impresiones de aquel gran desastre, quedó sin resolución.

En el mes de junio siguiente, llegó a Veracruz el señor Degollado y desde luego creyó el señor Lerdo que su presentación en el gabinete como ministro de la Guerra, ofrecería una nueva oportunidad para la consecución de su idea; pero, habiendo observado que en las juntas a que concurrió dicho señor, nada de sustancial se acordaba para mejorar la situación y temeroso de que así continuaría todo en el mismo estado, presentó la renuncia de las dos secretarías que tenía a su cargo, manifestando franca y amistosamente al señor presidente y al señor Ocampo que su resolución era motivada únicamente por el convencimiento de que entre ellas había diferencia notable sobre el modo de ver las cosas.

Si esa renuncia hubiera sido admitida, el señor Lerdo se habría ahorrado muchos disgustos y sinsabores, pero la Reforma no se habría tal vez dado y no podía ya demorarse porque había llegado su hora.

III

El señor Ocampo se interesó mucho entonces en que no se separara el señor Lerdo del gabinete. El señor Degollado explicó fuertemente al señor presidente la necesidad y conveniencia de que sin más demora se hiciese la reforma del clero y, sin embargo de que él no tenía ningún proyecto formado sobre esto y de que al día siguiente de haber

presentado su renuncia el señor Lerdo se marchó a Tampico, su opinión influyó mucho en el ánimo del señor Juárez y, por fin, después de algunas discusiones, el 7 de julio publicó el gobierno de Veracruz el manifiesto iniciado por el señor Lerdo y, en los días 12 y 13 del mismo mes, salieron a luz también las Leyes de Reforma que eran una de sus emanaciones.

Publicados estos importantes documentos que con tanto aplauso fueron recibidos en toda la República, sin excepción de los puntos que dominaba el bando reaccionario y que, por decirlo así, vinieron a formular el pensamiento del partido liberal en medio de la lucha que sostenía con aquél, marchó el señor Lerdo para los Estados Unidos con amplia autorización del gobierno constitucional para procurar recursos y, aunque los pasos que dio allí con este objeto fueron infructuosos, no lo fue del todo su viaje, habiéndolo aprovechado en afirmar entre los individuos del gobierno y otras personas notables de aquel país, las simpatías hacia el partido liberal, en la compra de armamento y otros objetos útiles y en el arrendamiento del pequeño vapor *Wawe* que tan buenos servicios prestó al gobierno constitucional, particularmente para la aprehensión de los vapores que la reacción hizo venir de La Habana para hostilizar a Veracruz.

A mediados de noviembre del mismo año regresó el señor Lerdo de los Estados Unidos a Veracruz y, a su llegada, tuvo motivos para conocer las fuertes prevenciones que en su contra existían en el mismo gabinete y que le impidieron volver a encargarse desde luego de las dos secretarías de que no se había separado sino muy temporalmente durante su ausencia.

Todos pueden todavía recordar cuál era la situación de la República en aquellos días. El mes de noviembre de 1859 había sido funesto para la causa de la libertad. Perdidas las acciones de Teotitlán del Camino y de la Estancia de las Vacas, el partido liberal se encontraba postrado y en la necesidad de luchar con todas las dificultades que se presentaban para la organización de nuevas fuerzas con qué continuar la campaña. El señor Degollado manifestó desde Matehuala su desconfianza de hacerla con buen éxito si no se adoptaban otros medios

que los que hasta entonces se habían empleado y todas estas circunstancias reunidas presentaban para nuestra causa un horizonte tan oscuro que no dejaba traslucir un solo rayo de esperanza.

En tan tristes y aflictivas circunstancias era necesario tener, no ya únicamente una fuerte dosis de constancia sino una completa indiferencia a todos los desastres que ya había sufrido la República y a los mayores que la amenazaban con la prolongación de una lucha de sangre y de exterminio, para no condolerse de tantos males y procurar ponerles un término satisfactorio.

Convencido entonces el señor Lerdo de que eso no era lo que exigían la razón y el patriotismo, lo hizo presente al gobierno con su genial franqueza, manifestándole que, en su concepto, tenía el imperioso deber de poner un fin a aquel triste estado de cosas, empleando todos los recursos que estaban a su alcance y que para ello no había otra disyuntiva que la de procurar por medios pacíficos algún arreglo que diera por resultado el triunfo de los dos grandes principios de nuestra bandera, esto es, el de que sólo en la nación reside el derecho de constituirse como mejor le convenga y el de la Reforma ya dictada y sancionada por ella misma o seguir la guerra con otra energía que hasta entonces, organizando nuestras fuerzas de la manera más conveniente para arrollar sin demora la soldadesca mercenaria que servía de apoyo al funesto bando reaccionario.

Esta disyuntiva no solamente fue desechada por el gobierno, sino que sirvió de tema, como lo está sirviendo hasta hoy, para que algunos émulos conocidos del señor Lerdo hicieran circular sigilosamente algunas voces con el dañado objeto de que apareciese como un hombre dudoso para los principios que constituyen el programa del partido liberal. ¡Y por cierto que es absurdo y ridículo en algunos hombres la pretensión de acusar de débil al mismo que los ha impelido a entrar en las grandes medidas que exigía la situación del país para asegurar prácticamente el triunfo de la libertad y del progreso!

En vista de esa diferencia de opinión se mantuvo el señor Lerdo durante algunos días separado de hecho del ministerio y con la resolución de no volver a formar parte de él, pero, a mediados de diciembre, instado

fuertemente por la opinión pública y muy particularmente por los señores Llave y Emparan, que con el señor general Partearroyo iban a integrar el gabinete, tuvo que prestarse a entrar de nuevo en él y como a la sazón se aprestaba ya en México la segunda expedición armada sobre Veracruz, el señor Lerdo considerando que en tales momentos podía ser funesta toda división entre los miembros del gobierno y que, por lo contrario, era de la mayor importancia que éste se presentara firmemente unido en el pensamiento de rechazar a los enemigos de nuestra causa, manifestó, entonces, en junta de ministros, que por su parte retiraba la idea antes propuesta, a fin de que desapareciera todo motivo de discordia y se trabajara únicamente en aquel importante objeto, dejando para más adelante la resolución de las cuestiones pendientes.

IV

Al encargarse de nuevo el señor Lerdo de la secretaría de Hacienda, pudo desde luego comprender todas las dificultades que tenía que vencer para hacer frente a las grandes y multiplicadas atenciones de la situación en que entonces iba a verse la plaza de Veracruz.

Cuando marchó a los Estados Unidos en julio del mismo año, merced al orden y economías de que antes hemos hablado y a los productos que dio la conducta de caudales, cuya bajada de México había promovido el mismo señor Lerdo, dejó éste al gobierno con más de 80,000 pesos disponibles en la aduana de aquel puerto y con las cantidades no pequeñas que debía producirle en sólo la ciudad de Veracruz la ejecución de la ley de nacionalización de los bienes llamados del clero; pero, durante los cinco meses de su ausencia, el estado de la Hacienda allí había cambiado notablemente, pues no sólo habían desaparecido los productos de las redenciones ejecutadas conforme a la citada ley y el sobrante que había en la aduana, sino que esta oficina se encontraba además gravada con la fuerte suma de 280,000 pesos que el gobierno había tomado del comercio como anticipaciones de los derechos que causaren y basta tener a la vista este dato, de cuya exactitud no podemos dudar porque el mismo señor Lerdo nos manifestó allí las

noticias de la aduana, para que pueda apreciarse lo penoso de aquella situación.

Sin embargo de esto, procurando por medio de una emisión de bonos sacar los recursos posibles del vecindario acomodado, antes de que éste emigrara, como emigró de la ciudad y, explotando el crédito de todas las maneras que estuvieron a su alcance, logró obtener recursos no sólo para cubrir las atenciones de la fuerte guarnición que entonces encerró la plaza, sino para los aprestos extraordinarios que por mar y tierra se ejecutaron para rechazar al enemigo.

Todavía cuando éste se encontraba ya frente a los muros de Veracruz y abría pláticas para un arreglo, a la sazón que el capitán Aldham de la marina inglesa presentaba al gobierno la nota de Lord John Russell que tanto conoce el público, insistió el señor Lerdo, no en que se aceptasen las bases propuestas por uno y otro porque, en su concepto, eran tan inconvenientes como impracticables, sino en que se adoptase alguna política inteligente que diera por resultado el que, sin necesidad de nuevos desastres para la nación, llegáramos al triunfo de nuestros principios; mas, como quiera que sus ideas encontraban oposición en el resto del gobierno, prescindió ya para siempre el señor Lerdo de indicar medida alguna política, dejando la dirección de la marcha de las cosas en este punto al resto del gabinete y se limitó a continuar sirviendo a la causa en el desempeño del ramo de Hacienda, que tenía especialmente a su cargo.

Con ese propósito y en vista de las dificultades que pulsaba para hacerse de recursos por el triste estado en que, como decimos antes, se encontraba la aduana de Veracruz, estado que se reagravó algo naturalmente con las exigencias pecuniarias del bombardeo, el señor Lerdo juzgó que era llegado el momento de apelar a alguna medida extraordinaria para obtener aquellos, con tanta más razón cuanto que previendo los sucesos de la lucha armada que en el interior iban precipitándose de día en día, creía indispensable que para el caso de que fuesen prósperos o adversos debía prepararse el gobierno, en materia de recursos, para hacer frente a la situación que los mismos sucesos pudieran crear. La única medida extraordinaria que en concepto del señor

Lerdo podía dar sin demora ese resultado, era la suspensión temporal del pago de la parte de derechos de importación asignada para las convenciones y deuda exterior de la República; pero, aunque esta medida fue acordada por el señor presidente a fines de mayo del año pasado, después de haber dado el mismo señor Lerdo los pasos conducentes y aun se comunicó oficialmente su resolución al capitán Aldham, el día siguiente al en que se dio ese paso, dispuso el señor presidente anular aquélla y el señor Lerdo se vio obligado a retirarse del gabinete para no tomar sobre sí el ridículo que recae siempre sobre un gobierno que en un negocio grave deshace hoy lo que hizo ayer.

Tres meses después, cuando a consecuencia de la victoria que obtuvieron las armas liberales en Silao, tomó la lucha un carácter de desenlace satisfactorio para nuestra causa y, cuando por ese motivo era un deber del gobierno hacerse a toda costa de recursos para auxiliar los esfuerzos de los heroicos ciudadanos que combatían a la reacción en el interior, a fin de que pudieran traer cuanto antes sus armas victoriosas a la capital, el señor Lerdo que se encontraba a la sazón retirado en la hacienda del . . . irador² bajó a Veracruz con el único objeto de insistir en que el gobierno adoptara la medida propuesta por él y, por fin, después de algunas vacilaciones, tuvo el triste consuelo de que, aunque tarde y mal, se diera aquel paso.

Una vez dictada esa resolución y resignándose el señor Lerdo a la inacción a que se veía condenado por circunstancias tan independientes y opuestas a su voluntad, se retiró a Jalapa con la idea de observar desde allí el curso que siguieran los acontecimientos, reservándose para trabajar siempre en servicio de nuestra causa cuando se le presentase la oportunidad. En aquel retiro supo por los periódicos y por su correspondencia el plan de pacificación iniciado por el señor Degollado, con quien no mantenía entonces relación alguna y nos consta que lejos de aprobar aquel pensamiento, lo calificó de descabellado, aunque manifestando al mismo tiempo su disgusto respecto de la dureza con que el gobierno trató por este motivo al señor Degollado, persona que,

² Destruído el periódico.

cualquiera que sea el juicio que algunos tengan acerca de su aptitud y capacidad, es acreedora a las consideraciones del partido liberal.

Más tarde, en el mes de octubre último, recibió el señor Lerdo en Jalapa una invitación de Miramón y del señor Pacheco, embajador de España, para pasar a esta capital con el objeto de tratar sobre las bases de un arreglo que diera por resultado la pacificación del país pero, considerando el señor Lerdo que tal invitación tuviese por origen el error en que algunos estaban, suponiéndolo dispuesto a ceder en algo de lo esencial de los grandes principios de nuestra causa, contestó que antes que aceptarla o de dar paso alguno, deseaba saber si en tal arreglo se había de admitir por base el triunfo de la Constitución y de la Reforma. A esta manifestación se contestó con un proyecto inadmisible en su concepto; mas, como al mismo tiempo se insistía en la idea de que pasara a esta ciudad, asegurándole que todo se allanaría satisfactoriamente, el señor Lerdo, comprendiendo que no podía ni debía obrar por sí solo en tan grave negocio, comunicó al señor Juárez lo que pasaba, ofreciéndose a venir a esta capital en el caso de que él aprobara el pensamiento y como dicho señor le contestó que en el estado en que se hallaban ya las cosas no le parecía prudente aquel paso, dio punto a la negociación sin volver a ocuparse de este particular.

Como se ve, no hemos tratado de presentar en las anteriores líneas la biografía pormenorizada del ilustre ciudadano a quien postulamos para presidente de la República. Una ligera reseña de sus esfuerzos incesantes por el prestigio y el triunfo de nuestra causa, durante los tras últimos años, es lo que hemos trazado para desimpresionar a las personas que, demasiado crédulas, han estimado como hechos positivos las calumnias gratuitas y groseras de los que, envidiando las dotes inapreciables del señor Lerdo, entregan su alma al odio que toda envidia trae consigo y se inclinan a propalar todo lo malo, como a negar todo lo bueno que se diga en pro o en contra de quien les causa involuntariamente aquella pasión, que también se nombra tristeza del bien ajeno.

Creemos que el *Constitucional*, chistoso colega que aguardaba la conclusión de este artículo para calificar a nuestro candidato y que al manifestar esto empleaba desde luego calificativos en su contra, creemos,

decimos, que el *Constitucional* puede entrar ya más de lleno en el terreno de las calificaciones y ser justo al hacerlas, si le place.

Entretanto, diremos, para concluir, que no será ésta la última vez que nuestra convicción íntima nos vuelva a poner la pluma en la mano, para tratar de la importante materia que nos ha ocupado en este artículo.

SE INICIA LA POLÉMICA:
OCAMPO ATACA A MIGUEL LERDO DE TEJADA

Casa de ustedes, enero 20 de 1861

Señores redactores del *Monitor Republicano*

En nombre de la imparcialidad, suplico a ustedes se dignen insertar en su diario el siguiente comunicado que dirijo a *La Tribuna*.

Soy de ustedes atento servidor.

Melchor Ocampo

Casa de ustedes, enero 19 de 1861.

Señores editores de *La Tribuna*

Señores de toda mi atención:

Agradeceré a ustedes se dignen insertar en su apreciable periódico las siguientes líneas que mi propia defensa y el bien de la República me obligan a publicar.

Dice *El Heraldo* en su número de ayer, que:

El gobierno, con el indulto de don Isidro Díaz y las otras medidas que se sabe está acordando, ha caído para no levantarse jamás y a nosotros lo que nos causa admiración es que aún se reúnan en el

Palacio los hombres rechazados por la opinión pública desde que quisieron sobreponerse a la ley, desde que pretendieron hacer traición a los principios proclamados, no sabemos con qué mira ni con qué objeto.

El solo hecho de que el gobierno continúe y de que la ansiedad pública se haya calmado, habrán convencido al público de la alta penetración con que *El Herald* profetizó que ese gobierno no podría levantarse jamás. Creo que la profecía no se habrá hecho tanto para mostrar la gratitud que *El Herald* conserva por la singular benevolencia con que lo trató el gobierno en los dos años que lo mantuvo en Veracruz, cuanto porque en calidad de partidario de una bandería, deseaba que realmente el gobierno cayese para siempre a fin de que tuviese lugar el filósofo proyecto que indica en el párrafo subsecuente, desde el punto en que dice:

El gobierno debe ser sustituido por hombres que, comprendiendo la situación, cumplan con las exigencias de la revolución desarrollando la Reforma, corrigiendo los abusos, restableciendo la moral y castigando a los criminales, conforme a las disposiciones expedidas sobre la materia.

Falta, en la enumeración de estas señas, el nombre de las personas entre las que acaso tendrá *in petto El Herald* a su principal redactor, cuyos talentos administrativos y profundas convicciones son tan conocidas de él mismo; pero sobre lo que no puede caber duda sobre que el hombre a quien principalmente se refiere *El Herald*, es el señor don Miguel Lerdo de Tejada, como su candidato que es para la presidencia de la República.

Pero ya que este señor consiente en que el periódico que sirve de órgano a sus conocidas aspiraciones que lo han constituido en perpetuo conspirador contra el señor Juárez, trate tan mal a sus antiguos compañeros de ministerio y ya que la República estaría pésimamente gobernada, si guiándonos por cierto charlatanismo, tuviese la desgracia

de elegir presidente al señor Lerdo, bueno será que yo diga unas cuantas palabras sobre la conducta de este señor, ofreciendo probar mi dicho tan ampliamente como lo desee quien más interesado estuviere de ello. El señor don Miguel Lerdo de Tejada deja con frecuencia de comprender las situaciones. Pruébalo, en parte, el tiempo que aquí estuvo escondido, mientras que los demás luchábamos; pruébalo su deseo de transacción a toda costa, en más de una época; pruébalo su convencimiento también en más de una época, de que no podíamos triunfar sin traer americanos armados; pruébalo su convicción de que la lucha que ahora ha concluido, no podía terminar por la sola fuerza de las armas. El señor don Miguel Lerdo de Tejada, no puede desarrollar la Reforma porque por ella sólo entiende la ocupación de los bienes del culto, ni puede corregir los abusos, ni restablecer la moral, ni castigar a los criminales, porque las mismas leyes que llevan su nombre entrañan tales principios de injusticia y desacierto que no es posible fundar en su autor tales esperanzas.

Prescindo, por supuesto, del modo pretencioso con que nos califica el señor redactor de *El Herald*o. La República, que tiene por fortuna otros órganos de su justicia, nos hará la que cada uno de nosotros merezca, que es lo único a que aspiramos los desinteresados servidores de aquélla.

Con la esperanza de publicar dos escritos en que más ampliamente me ocupe de la defensa del gobierno y de la mía propia, quedo de ustedes, señores editores, su atento servidor que agradecido b. s. m.

Melchor Ocampo

MIGUEL LERDO DE TEJADA
CONTESTA A OCAMPO

Casa de ustedes, enero 2 de 1861

Señores redactores del *Monitor Republicano*

Muy señores míos:

Si en ello no tuvieran ustedes inconveniente, he de estimarles que se sirvan insertar en su apreciable periódico el siguiente remitido, que hoy dirijo a los señores redactores de *La Tribuna* contando por este favor con la gratitud de su atento servidor q. b. s. m.

Miguel Lerdo de Tejada

Casa de ustedes, enero 21 de 1861

Señores redactores de *La Tribuna*

Señores de toda mi atención:

En el periódico que ustedes redactan, correspondiente al día de hoy, se halla inserto un comunicado del señor don Melchor Ocampo, en el que, suponiéndome equivocadamente responsable de los ataques que en estos últimos días dirigió *El Heraldo* contra el ministerio de que formaba parte, desahoga su ira respecto de mi hasta el extremo de imputarme los más graves cargos que pueden dirigirse a un hombre público.

Como consta a todas aquellas personas que están medianamente informadas de los sucesos de la época, no es de ahora que el señor Ocampo abriga contra mi una odiosidad que no ha sabido o no ha querido disimular y fácilmente se comprenderá que si yo estuviera animado hacia él de una pasión semejante, no me faltaría que decirle para corresponder a las invectivas con que siempre procura difamarme. Mas, como comprendo que en esto cometería yo una falta, porque lo es muy grave, en mi concepto, la de que individuos que sostienen una misma causa se denigren unos a otros, lo cual cede siempre en mengua de aquélla, he preferido guardar silencio, dejando al público sensato la calificación de aquella conducta. Además, yo reconozco que el señor Ocampo ha sido un partidario de la libertad y del progreso y que ha servido siempre a tan buena causa hasta donde han alcanzado su instrucción y capacidad y creo que, el no estar yo de acuerdo, como no lo estoy, con su modo de ver las cosas en muchas materias, no me autoriza para herirlo en su reputación.

Sin embargo, de ese silencio que me he impuesto en esta cuestión, hay en el remitido a que me refiero tres cargos de que, tanto por su gravedad, cuanto por ser ya formulados en público, no puedo desentenderme. Estos tres cargos son los siguientes:

Primero: que por mis conocidas aspiraciones, me he convertido en perpetuo conspirador contra el señor Juárez.

Segundo: que en más de una época he tenido el deseo de transar a toda costa con el bando reaccionario.

Tercero: que también en más de una época he tenido el convencimiento de que no podíamos triunfar sin traer americanos armados.

Y, como al dirigirme estas acusaciones, ofrece el señor Ocampo "probar su dicho tan ampliamente como lo desee quien más interesado estuviere en ello", mi única contestación, siendo yo la persona más interesada, es pedirle que publique las pruebas que tenga de sus asertos, dejando desde ahora al público, en el caso de que tales pruebas no aparezcan, como estoy seguro de que no aparecerán, la calificación que merezca mi acusador.

Siento mucho, señores redactores, que el ataque personal que tan gratuitamente se me ha dirigido por medio de su periódico, me ponga en el caso de tener que ocupar la atención pública con cosas que afectan a mi individuo; pero ya que ese hecho me obliga a defenderme, espero que ustedes tendrán la caballerosidad de insertar estas líneas, contando con la gratitud de su atento servidor que besa su mano [q. b. s. m.].

Miguel Lerdo de Tejada

LERDO DE TEJADA AMPLÍA SU RESPUESTA

Casa de ustedes, enero 23 de 1861

Señores redactores del *Monitor*
Muy señores míos:

Contando con la bondad de ustedes les suplico que tengan a bien dar lugar en su periódico, al siguiente comunicado que hoy dirijo *La Tribuna*, por cuyo favor les quedará muy agradecido su atento servidor q. s. m. b.

Miguel Lerdo de Tejada

Casa de ustedes, enero 23 de 1861

Señores redactores de *La Tribuna*

Muy señores míos:

Por la precipitación con que escribí antes de ayer la contestación que me tomé la libertad de enviar a ustedes relativa al comunicado que publicaron del señor Ocampo, omití hacer mérito de dos cargos que me dirige en él dicho señor y que no ceden en gravedad a los que en ella mencioné. Esos dos cargos son:

Primero: que yo no puedo desarrollar la Reforma, porque por ella sólo entiendo la ocupación de los bienes del culto.

Segundo: que yo no puedo corregir los abusos, ni restablecer la moral, ni castigar a los criminales, porque las mismas leyes que llevan mi

nombre entrañan tales principios de injusticia y de desacierto, que no es posible fundar en su autor tales esperanzas.

Y como ya comprenderán ustedes que estas dos inculpaciones envuelven no solamente un fuerte ataque contra mi persona, sino también una calificación acerca de la cuestión de más vital importancia en la actualidad, he de agradecer a ustedes que se sirvan insertar estas líneas en su estimable periódico, como un apéndice a mi citada contestación, a fin de que el señor Ocampo, al dar las pruebas sobre los tres puntos de que hablé en ella, tenga la bondad de presentar también las relativas a estas dos de que ahora hago referencia.

Con la esperanza de que me disimularán ustedes esta nueva molestia, me repito a sus órdenes como su muy atento servidor q. s. m. b.

Miguel Lerdo de Tejada

SEGUNDA RESPUESTA DE OCAMPO³

Por haberme opuesto yo a la candidatura del señor don Miguel Lerdo de Tejada para la presidencia de la República, he tenido por ello necesidad de explicar parte de las razones que para tal oposición tenía; este señor vino pidiendo, en un comunicado que *La Tribuna* insertó en su número del 23 de enero próximo pasado, que yo probase que durante la lucha que vamos acabando de pasar, había el señor Lerdo, primero, vueltose un constante conspirador contra el señor Juárez; segundo, tenido en más de una ocasión el deseo de transar a toda costa con la reacción y tercero tenido también en más de una ocasión el convencimiento de que no podíamos triunfar sin traer americanos armados. En el número de *La Tribuna*, correspondiente al 26 de dicho mes, respondí a esa interpelación y prometí publicar dos escritos en que más ampliamente me defendería, luego que recibiera los datos que para ello necesitaba. He recibido, por fin, mi equipaje que esperaba de Veracruz y con él la copia del informe que aquí se leerá.

Cualquiera que reflexione sobre la exposición que ahora publico y las notas que le agrego, convendrá en que las leyes que llevan el nombre del señor Lerdo, entrañaban tales principios de injusticia y desacierto que no es posible fundar en su autor esperanzas de que regenere el país, como lo dije en mi primer comunicado y, como deseaba el señor Lerdo, en una segunda carta publicada también en *La Tribuna*, que yo probase.

La exposición dice:

Lo que precede corresponde a la primera publicación que ofrecí hacer sobre los desaciertos e injusticias de las leyes que llevan el nombre

³ No hemos podido consultar el ejemplar del 26 de enero de *La Tribuna* a que se refiere Ocampo en este artículo en que apareció la primera respuesta del *Reformador Michoacano*. Hemos buscado esta declaración sin encontrarla en diversos libros y en otros periódicos de la época en la Hemeroteca Nacional, Biblioteca del Congreso en Washington, Biblioteca de la Universidad de Texas y colecciones particulares.

del señor Lerdo, Mi segunda publicación será más extensa y dilatará más tiempo, porque estoy reuniendo los materiales y comprobantes de la reseña que me propongo publicar sobre la administración del señor Juárez en el tiempo que fui su ministro.

Pero no debo dejar pasar la ocasión de decir algunas reflexiones más sobre los primeros puntos que el señor Lerdo quería que yo probara y para ellas me serviré de la autobiografía que ha publicado por boca de... el editor de *El Herald*o.

Dice, pues, en el número de éste que corresponde al 20 de enero, que cuando el señor Juárez emigró -la palabra no es propia sino de la malicia- por el puerto de Manzanillo, el pensamiento constante del señor Lerdo no fue otro que el restablecimiento del orden constitucional y que esto lo supieron muchos buenos liberales con quienes estaba de acuerdo. Ya antes nos había dicho en el mismo editorial que el señor Lerdo estuvo pronto a ponerse a la cabeza del movimiento con su carácter de magistrado de la Suprema Corte de Justicia. ¿Es esto ayudar al señor Juárez o conspirar contra su autoridad? Este error del señor Lerdo y de otros muchos duró casi todo el tiempo de la lucha. Hablo del de creer que cualquier miembro de la Corte de Justicia era llamado a la presidencia de la República. No, no era llamado sino el presidente de la corte. Este se elige popularmente y con la misma solemnidad que el presidente de la República. Pero esta clave que se nos da en *El Herald*o, explica clara y satisfactoriamente toda la conducta del señor Lerdo, respecto del descrédito que con tanto ardor procuró echar sobre la apatía, debilidad, ininteligencia, etc. del gobierno del señor Juárez.

Lo que hubo de peor en todo fue que, habiendo el señor Lerdo estado dos largas temporadas en el ministerio, no supo remediar la apatía, la debilidad, la ininteligencia del señor Juárez. Fuera de las Leyes de Reforma, que no eran sino, aunque seguros, medios remotos de acción contra los rebeldes, no hizo más que instar para que el gabinete se completara y no le vimos ninguna otra medida, expedida o propuesta, sino la de traer americanos armados o transar. No había recursos pecuniarios con qué impulsar la guerra y, aunque esto se palpaba por

todos, el natural deseo que todos tenían de que terminara, hacía olvidar con frecuencia tal falta y atribuirle a la de energía o de inteligencia.

Hay una confesión curiosa e importante en el fin del segundo editorial de *El Herald*o, 22 de enero de 1861, dice: “pero la Reforma no se habría tal vez, dado y no podía ya demorarse, porque había llegado su hora”. Luego no era su hora cuando la propuso el señor Lerdo unos cuantos meses antes.

Dice *El Herald*o en su tercer editorial sobre su candidato, enero 23 de 1861 "todas estas causas reunidas presentaban para nuestra causa un horizonte tan oscuro, que no dejaba traslucir un solo rayo de esperanza".

En tan tristes y aflictivas circunstancias, era necesario tener, no ya únicamente una fuerte dosis de constancia, sino una completa indiferencia a todos los desastres que ya había sufrido la República y a los mayores que la amenazaban con la prolongación de una lucha de sangre y de exterminio, para no condolerse de tantos males y procurar ponerles un término satisfactorio.

Convencido entonces el señor Lerdo de que eso no era -¿cuál es eso?- lo que exigía la razón y el patriotismo, lo hizo presente al gobierno con su genial franqueza, manifestándole que, en su concepto, tenía el imperioso deber de poner un fin a aquel triste estado de cosas, empleando todos los recursos que estaban a su alcance y que para ello no había otra disyuntiva que la de procurar por medios pacíficos algún arreglo que diera por resultado, etc. o seguir la guerra con otra energía que hasta entonces, etc.

Ese arreglo por medios pacíficos fue lo que entonces todos y yo, y después yo, hemos llamado transacción y si no lo era, que se nos diga cómo se llamaba. El señor Lerdo confiesa que entonces el horizonte no le dejaba traslucir ni un solo rayo de esperanza. No es raro, pues, que entonces quisiera, cuando menos, seguir viviendo aunque fuese por medios pacíficos.

En cuanto a su sensibilidad por la prolongación de una lucha de sangre y exterminio, nos vemos tentados de repetirle un pasaje de Proudhon, aunque tanto repugne al señor redactor de *El Progreso* de Veracruz que yo pierda mi tiempo en seguir las elucubraciones de

Proudhon: "Quedaos en vuestra casa, almas virtuosas, dad a vuestras mujeres y a vuestros hijos el ejemplo cotidiano de modestia y de perfecto amor; pero no os mezcléis en la política. Se necesita, preguntádselo si no a los del 93, una conciencia amplia que no se espante con ocasión de una alianza adúltera, de la fe pública violada, de las leyes de la humanidad holladas, de la Constitución cubierta con un velo para hacer la obra de las revoluciones".

Y por lo que hace a la mayor energía de la guerra, yo no sé si podrá citarse como muestra la necesidad en que después se vio el excelentísimo señor ministro de la Guerra, el señor general Partearroyo, de abandonar a Alvarado, porque el señor Lerdo no pudo o no quiso dar los recursos necesarios para su defensa y oportuna fortificación. ¡Declamaciones, declamaciones! Nos faltaban recursos para impulsar la guerra y nos faltaron antes, entonces y después del ministerio del señor Lerdo. Hablar, pues, de mayor energía en la guerra, era. . . hablar.

Pero va una de transacción.

En el cuarto editorial de *El Heraldo*, 25 de enero, dice, que el señor Lerdo insistió en que "se adoptase una política inteligente que diera por resultado el que, sin necesidad de nuevos desastres para la nación, llegáramos al triunfo de nuestros principios". Nosotros llamamos transacción a la política inteligente.

Y van dos confesiones de transacción.

¡Lástima que en ninguna de ellas se hubiera tomado la molestia el señor Lerdo de dirigirse a la nación, persuadiéndola, como estaba persuadido, de que por tal o cual sistema de medios pacíficos o de política inteligente cesarían la sangre, el exterminio y los desastres! En ilustrar sobre esto a la nación no hizo todo lo que podía. Si tales publicaciones se hubieran hecho entonces, ahora tendríamos un buen criterio, el resultado, para apreciar debidamente el ningún rayo de esperanza, la imperiosa alternativa, etc.

Se volvería este escrito más largo y, por lo mismo más fastidioso de lo que ya es, si examinara yo menudamente el rasgo autobiográfico que contiene *El Heraldo* en sus editoriales citados. Pero no quiero concluir sin hacer una advertencia a los amigos del señor Lerdo, que

tuvieron ocasión de oírle en las épocas respectivas, sus teorías sobre medios pacíficos y política inteligente. La advertencia consiste en pedirles que no crean todo lo que le oigan al señor Lerdo y, sobre todo, que no lo cuenten o no lo publiquen, porque es muy capaz de pedirles luego que prueben que lo dijo o que se lo oyeron. Los que recuerden lo que entonces pasó estarán maravillados de la falta absoluta de memoria que impulsa hoy al señor Lerdo, al mismo tiempo que a confesarlo, aunque algo desfigurado en *El Herald*o, a pedirnos a otros que probemos nuestro dicho.

Pomoca, febrero 28 de 1861.

Melchor Ocampo

EXPOSICIÓN DE OCAMPO A JUÁREZ
COMENTANDO LAS LEYES DE DESAMORTIZACIÓN
Y NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO

Excelentísimo señor presidente constitucional interino de la República,
ciudadano Benito Juárez
Presente

Excelentísimo señor:

No acierto a dar mejor forma que la de la presente exposición, a la constancia que vuestra excelencia [V. E.] quiere que quede en los archivos de las razones que se han tenido presentes para modificar y en parte para aclarar la ley de 13 de julio del presente año, por la cual ocupó el gobierno civil los bienes cuyos productos y, en parte la administración, eran del clero.

Antes de pasar al relato de lo acaecido y exposición de sus fundamentos, pido a V. E. que me permita hacer constar también una u otra reflexión sobre la naturaleza de estos bienes.

La ley de 25 de junio de 1856, que los trató como propiedad del clero, no solamente ha sido uno de los obstáculos más graves en la región de la inteligencia para dirigir el espíritu público a donde habría convenido, sino que fijó a esos bienes un carácter que sólo abusivamente habían ido tomando. Las donaciones entre vivos y por testamento que forman estos bienes, los alejan del uso común y de la verdadera propiedad, puesto que no pueden ni alterarse en su posesión, ni variarse en sus aplicaciones. Quedan propiamente de nadie. Aunque el aprovechamiento de su usufructo esté destinado a personas determinadas como los capellanes, o indeterminadas como curas, sacristanes, músicos, cantores, etc. en las funciones. Les faltan los dos principales caracteres

de la propiedad, el aumento o disminución por la industria y la enajenación libre. Declararlos, pues, de alguien era quitarles el mismo carácter de espiritualización que los interesados deseaban conservarles y que nuestras antiguas leyes así denominaron, sin duda para explicar de algún modo este singular abuso de la propiedad, que dizque sigue siendo propiedad aun cuando ya no tiene dueño. Pero este alguien no debió ser el clero.

Vengamos ahora a la ley y las circulares que la han seguido.

Preferiré en esta exposición el orden cronológico, porque no quiero disertar sobre la materia. Lo primero que tuvo que hacerse fue responder a las preguntas que el excelentísimo señor gobernador de este estado hizo, sobre el modo como debían ser remunerados los comisionados y peritos que la ley mandaba se ocupasen. La simple lectura de la circular de 19 de julio explica el motivo que V. E. tuvo así para distinguir a los peritos ingenieros de todos los demás, como para dejar al arbitrio prudente y conocimientos locales de los excelentísimos señores gobernadores, las pocas disposiciones reglamentarias que se necesitaban para los comisionados.

Apenas se tuvo en México noticia de la publicación de la ley cuando vinieron muchos de los amigos y aun de los indiferentes, representando así a los miembros del gobierno, oficial y extraoficialmente, como a otras varias personas de la ciudad, y de este segundo modo, sobre el grave perjuicio que resultaría a los que redimiesen o denunciasen capitales o fincas, si, viviendo ellos en los puntos ocupados por la reacción, sus nombres se publicaban conforme a la prescripción del artículo 15 de la ley. Era, en efecto, un mal modo de remunerarles por su confianza en el gobierno y obedeciendo a sus disposiciones, el de delatarlos a un enemigo sanguinario e implacable, como sostenedores del gobierno. Por no exponerlos, pues, a tal peligro, se dictó la primera disposición que contiene la circular del 27 de julio.

La segunda prevención de ella, por la que se declara que los 30 días no empiezan a contarse sino después de la publicación oficial explica el artículo 31 de la ley. Prefiero decir que ella no es bastante clara, más bien que no el que se suponga que el gobierno quiso privar de

los derechos que él mismo había concedido a personas, que, lejos de merecer tal pena, merecían al contrario y merecen indemnizaciones de parte de quienes los perjudicaron, y aun recompensa de parte del gobierno, que los considerará por haberle ayudado en esta reforma social. Esto necesita más amplia explicación y ruego a V. E. que aunque este escrito le parezca cansado, me permita entrar en ella.

Ya que por la ley de 25 de junio de 1856, se reconoció al clero una propiedad que nunca tuvo, que ni aun después de la ley adquirió sino sólo para facilitar sus abusos y, que si nunca tampoco debió declararse, mucho menos en el momento mismo en que de ella se la privaba por la enajenación de los bienes que él llamaba suyos, se determinó, muy cuerdamente, que los mismos inquilinos o arrendatarios de las fincas urbanas o rústicas, en que consistía una buena parte de esos bienes, fuesen los nuevos adquiridores de ellos. Había en esto tres buenas y principales razones, que muy probablemente tuvo presentes el gobierno de aquella época. Tales eran: primera, la de justicia, por la que se conciliaba la posesión, el hábito, los intereses y a veces aun los efectos que los que ocupaban las fincas podían tener en ellas, se conciliaban, digo, con la necesidad de enajenarlas. Segunda, la de conveniencia, pues que no encontrándose quién conociera y estimara más la alhaja poseída de lo que podía estimarla y conocerla el poseedor, con nadie se llegaba más fácilmente que con los mismos poseedores a las facilidades de la enajenación, a pesar de la traba que oponía el error económico de la alcabala. Tercera, la necesidad porque careciéndose de los datos fiscales para saber y distinguir cuáles eran esos bienes ninguna pesquisa era ni más segura, ni más violenta ni más eficaz, que el interesar a los que conocían esos bienes, en denunciarlos ante la autoridad.

Permítame V. E. formular el contrato que supongo yo que tácitamente se proponía a los tenedores de esos bienes. "Si me decís, señores inquilinos y arrendatarios del clero, cuántos son, cuánto valen, en dónde y cómo están los bienes llamados del clero, os hago dueños de los que tenéis de él; si no me lo decís, traslado este derecho que quiero concederos al que me los denuncie y así a los denunciante como a vosotros y, mediante el pago de cinco por ciento de alcabala y de un

reconocimiento al seis por ciento del valor que ahora tienen, os haré dueños para siempre de esos bienes".

Permítame, también, V. E. que ahora formule lo que a los nuevos propietarios decía la ley de 13 de julio: "Si quieres poseer en plena libertad los bienes que te adjudiqué hace tres años y quitarte del gravamen y molestia de continuar reconociendo como rédito al seis por ciento al año el valor de ellos, te condonaré un cuarenta y dos por ciento de éste y te daré la facilidad de pagar en pequeños abonos el 58 restante, a saber: uno por ciento mensual durante cuarenta meses y 18 por ciento que te costarán tres quintos del valúo que me has de pagar en bonos a los 30 días de proponerte este contrato". Y a los antiguos censatarios se decía: "Si quieres ser dueño del capital que hasta ahora has reconocido, te haré las mismas concesiones que a los adjudicatarios de 1856".

Pues bien, los adjudicatarios cumplieron, cuanto estuvo en su posibilidad, la parte del contrato que a ellos proponía el gobierno: pagaron desde luego el cinco por ciento de alcabala y fueron pagando sucesivamente la antigua renta convertida en rédito al seis por ciento. Si algunos defraudando el texto o el espíritu de la ley, o sólo hicieron adjudicaciones simuladas, o después no pagaron la antigua renta, ni fueron todos, ni debemos tener en cuenta el abuso, sino para impedirlo o remediarlo. Si después, una gran mayoría se vio imposibilitada de seguir cumpliendo su contrato y privada del beneficio que podía sacar de la posesión, todos sabemos que fue por fuerza mayor y que lejos de castigarla por ello se le debe, al contrario, reparación por parte de quienes hicieron el perjuicio.

Antes de continuar la exposición de este punto, creo conveniente decir, primero, que no era tan ventajoso adquirir las fincas con las condiciones de la ley de 25 de junio de 1856. Me bastaría, como prueba de tal aserto, citar que hubo muchísimas fincas, fuera de las capitales, que quedaron sin adjudicarse, porque a ninguno pareció que eran benéficos, en aquellas fincas urbanas, los términos de la adquisición por haberse caído en el error de igualarlas con las de la capital, pero deseo, además, mostrar dos razones de las principales para corroborar este mi dicho. "Es un axioma de la economía política, que no debe imponerse al capital,

sino a la renta". Este principio es fundamental y el quebrantarlo conduce al absurdo de que el fisco absorba todo, lo que es indebido. La alcabala impuesta a la traslación del dominio, es uno de los errores españoles en que más claramente se ve que la imposición se hace sobre el capital. El inventario social, cuando la finca es de A, en nada se altera, ni menos ha producido, cuando al instante después, la finca es de B, y como de llamarse primero de A y después de B, no se ha producido ningún nuevo valor, es claro que la cuota que deban pagar o A o B, ha de tomarse del capital que se transfieren. Como la cuota, en nuestro caso, era de un cinco por ciento, si suponemos que en un mismo día el dominio de una finca se trasladase a 19 titulares, el pago de las 19 traslaciones al cinco por ciento, habría absorbido 95 por ciento. Es claro, pues, que para el vigésimo a quien quisiera venderse o trasladarse la misma finca, ya no podría dársele, en esta última operación, más que el título porque el cinco único que restaba de los primitivos 100, debía también ser absorbido por el fisco. Desprecio las fracciones para hacer más sensible el resultado.

Así, por el solo capítulo de alcabala de traslación de dominio, los bienes de manos muertas quedaron gravados en el inventario social, con una suma fuerte, el vigésimo de lo que se supone que valían, tomando tal suma de los otros bienes de la República, para que la consumiese el gobierno y para que el clero sanease y mejorase su dominio. Se gravó, pues, la fortuna pública en cinco por ciento en beneficio del clero, que para nada volvería a contribuir a los gastos públicos. Pero el gravamen que tales bienes tenían a la fecha del 13 de julio del presente año, era mucho mayor, como bien pronto procuraré demostrarlo.

Por lo pronto sólo debo hablar de la otra consideración por la que era onerosa la adquisición de los bienes de manos muertas conforme a la ley de 25 de junio de 1856.

A primera vista y para las personas irreflexivas, parece que pagar una cuota cualquiera mensual como renta es lo mismo que pagar su igual como rédito: si los números son iguales para la exhibición, parece que nada importa que se diferencien en el nombre. Pero en la realidad no es así. El antiguo arrendatario, por sólo llamarse propietario tenía que pagar al cabo del año, a más de las 12 mensualidades de sus primitivas rentas,

todo lo que tenía que gastar para la reparación y conservación de la finca, conservación y reparación que antes eran a cargo de la mano muerta. Tenía, además, que sufrir todas las temporadas en que los inquilinatos vacaban, vacaciones que antes eran también a cargo de la mano muerta. De manera, que por el solo hecho de haberse adjudicado a los inquilinos las fincas urbanas del clero, éste se volvió más rico y los inquilinos quedaron más gravados. Acaso no se habría encontrado, aunque se buscara, medida más hostil contra la sociedad, ni pretexto menos lógico para sacar un 5 por ciento de la fortuna del adquiridor y en nombre de los bienes que se le adjudicaban disminuidos realmente en esta cantidad y gravados también realmente con reposiciones y vacaciones, así como con el pago de contribuciones que antes corrían a cargo del que se llamaba propietario.

Si la insolencia y espíritu de dominación del clero no hubieran sido para él superiores a toda consideración económica, habría debido no sólo aceptar sin murmurar unas disposiciones que tanto lo beneficiaban, sino aún bendecir y levantar estatuas a quien con tanto gravamen de la sociedad laica le había saneado y asegurado por esta conversión de la propiedad, la posesión de sus a veces mal adquiridos y casi siempre mal aplicados bienes.

En México, en donde la abundancia de población, comparativamente a los demás puntos de la República, hace tan fácil el encontrar inquilinos y subir tanto el precio de los alquileres; en México, en donde la suavidad del carácter había prevalecido sobre la avaricia del sacerdocio y conservado en muchos casos los bajos arriendos impuestos de muchos años atrás; en México podría ser ventajoso para muchos adquirir la propiedad, a pesar de las gravosas condiciones que he expuesto. Algunos otros casos habría en que, en los demás pueblos de la República, se verificara también ésta; pero, sin temor de equivocarme, puedo asegurar que la mayoría de los adjudicatarios de fincas urbanas, adquirió por consideraciones muy diversas de las que un cálculo bien entendido de sus intereses les hubiera hecho tener presentes.

Pues bien, señor excelentísimo, a personas ya tan mal preparadas económicamente cuando les dice la ley de 13 de julio del presente año:

"Te remito (reduzco) un 42 por ciento del avalúo de lo que te adjudicaste". Condonación que podía tomarse no sólo como facilidad para hacer cumplir el espíritu de tal ley, sino también, aunque no principalmente para compensar en parte los perjuicios que acabo de manifestar que resintieron los adjudicatarios, no es justo, no es racional, no es siquiera decente, que tal remisión se acompañe de condiciones que la vuelvan nugatoria. E inútil sería, burla pareciera, si para llegar a disfrutarla, no se les obligase a venir a presentarse ante el gobierno de V. E., cuando se halla alejado de los grandes centros de población de la República, rodeado por desgracia de una atmósfera de difícil acceso a causa de los ladrones y de los enemigos y cuando los concesionarios residen habitualmente bajo el dominio de éstos y podrían perder, si se supiere que con V. E. se entienden, algunos la libertad, algunos hasta la vida y todos la tranquilidad de muchos días.

A semejantes condiciones, lazo o trampa y no reparación ni favor, parecería el artículo 31 de la ley de 13 de julio, si no se hubiera aclarado en los términos que V. E. mandó que se hiciese y éste es el segundo punto de la circular de 27 de julio.

El artículo 22 de la ley condonaba los réditos vencidos hasta la publicación de ésta y sin hacer distinción de ninguna en el carácter de ellos. Habíase ya vuelto una especie de rutina en la República reprobar la fidelidad en los contratos en el cumplimiento de las obligaciones y reprobarla tan severamente, que no sólo se castigaba a los que eran fáciles y exactos, sino que, y a fin tal vez de que el sistema fuese completo, se premiaba a los tramposos y negligentes y esto, no con un tanto por ciento proporcionado a las circunstancias de la trapacería, sino con el todo de la cantidad adeudada. En muchas contribuciones y, especialmente, en las que en varias veces llevaron el nombre de préstamo forzoso, los que impulsados por un buen espíritu patrio o por una delicadeza habitual en cumplir lo que se les imponía como obligación, pagamos con religiosa exactitud las cuotas que se nos imponían, al natural vencimiento de unos plazos y, en muchas veces, al tercio o a la mitad de la recaudación de tales plazos una nueva iniquidad, revestida con el carácter de ley, venía diciendo que cesaba la contribución, que a

los que habíamos pagado se nos reembolsaría. . . el día del juicio. . . y que se remitían a veces las multas o reagravación de cuotas a los morosos en el pago al vencimiento de los plazos, a veces la cuota toda a los que nada habían pagado. Parecida en algo a esta irritante iniquidad, era la disposición del artículo 22 de que me ocupó; digo en algo, porque en este caso de los réditos había en verdad circunstancias que atenuaban tal injusticia; pero no eran tales que del todo la borrasen.

Chocó desde luego a V. E. esta disposición y, antes de seguir hablando de ella, me permitirá le recuerde varios pormenores, no sin interés, así para la más fácil inteligencia de parte de lo que sigue, como para la historia de las Leyes de la Reforma. Servirá de rectificar al paso varios errados conceptos que ya circulaban y que, aunque alguna vez han de aclararse, conviene que desde ahora tengan reunidos y escritos algunos datos para verificarlos.

No creo que sea del caso hacer la historia de todo este negociado; pero sí me parece indispensable consignar aquí el recuerdo de los hechos que siguen. Una vez resuelta la formación y promulgación de las Leyes de la Reforma, reunimos y leímos la mayor parte de todos los materiales, que así el excelentísimo señor ministro de Justicia, como V. E. mismo y yo, teníamos escrito desde el mes de junio de 1858. Como entonces creíamos que la revolución podría tener un pronto término y como V. E. estaba resuelto a que antes de la entrada en México del gobierno constitucional, habían de publicarse simultáneamente todas las disposiciones que el nuevo programa exigía, habíamos procurado preparar todos estos trabajos. Aunque no se discutieron uno a uno nuestros proyectos, de todos se fue tomando lo que pareció conveniente y la parte de la Reforma que consiste en la separación del gobierno civil de toda intervención eclesiástica, en la supresión de monasterios y establecimientos del estado civil de las personas, fueron obra de nuevas y largas discusiones, como lo había sido la mayor parte de los puntos del manifiesto. Pero habiéndose tenido que vencer para la expedición definitiva de todos estos decretos, un muy considerable número de resistencias, aun de la parte del excelentísimo señor ministro de

Hacienda,⁴ a pesar de que había sido el más ardiente impulsor de su publicación, los sucesos se habían venido encima y hacían ya imposible la demora consiguiente a una más reposada y atenta discusión de los pormenores de esta ley de hacienda -13 de julio. El excelentísimo señor Degollado se había ido a Tampico, seguro, por nuestro dicho, de que pronto vería esas leyes. El excelentísimo señor Lerdo se iba para los Estados Unidos, a procurar, precedido de su buen nombre, sacar la mayor ventaja posible, así de la novedad que la publicación de esas leyes debía causar, como del buen espíritu que en favor nuestro había de suscitar su noticia. El correo del *Tennessee*, que debía llevarla para México, debía salir en un término angustiado y angustiado también era el de la vuelta del mismo *Tennessee* para Nueva Orleáns.

V. E. recordará que tal ley de 13 de julio no tuvo más que dos lecturas en el gabinete: la una como si hubiese sido para lo que en el sistema parlamentario se llama discusión en lo general y la otra que, aunque se hizo deteniéndose en cada artículo, sólo fue por unos cuantos minutos y para discutir ligeramente las objeciones que la sola lectura hacía nacer. Aún se convino en que el señor Lerdo, autor del fondo de esa ley, presentara después de tal discusión un ejemplar en limpio, en el que estuviesen ya salvas las objeciones hechas y se pudiese juzgar mejor de los términos en que quedase y del conjunto del pensamiento; pero la premura que ya he indicado impidió aun esto y hasta el punto de que tirados los primeros ejemplares que circularon en esta ciudad contra acuerdo expreso de todos nosotros, fue necesario que yo anduviese de prisa y ya en la noche, cuidando de que el señor Lerdo mandase a hacer una corrección importante, que por la urgencia le indiqué ante el excelentísimo señor McLane, en cuya compañía lo encontré.

Pasábamos una verdadera y grave crisis y, antes que todo, lo que importaba era que no pasase estéril. No es, pues, extraño que después se hayan conocido huecos y defectos que tan somera discusión no permitió descubrir y lo es mucho menos reflexionando que la confianza que nos merecían los estudios especiales del excelentísimo señor ministro de

⁴ Miguel Lerdo de Tejada.

Hacienda y su dicho muy repetido de haber sido éstos su constante ocupación de muchos años, y la ley de que se trata su estudio especial de los cinco últimos, creímos, como era natural, que todo debía estar bien meditado y combinado. Fue ésta una de las causas de que V. E. no se fijara sobre el artículo 22 que tanto y tan justamente le llamó la atención después de publicada la ley.

Para evitar, pues, la notoria iniquidad que tal artículo consagraba y principalmente para que no quedaran premiados los defraudadores del Tesoro Público, que ni a él ni al clero pagaban, ni habían pagado, los réditos posteriores, a los adjudicatarios de 1856, fue necesario, por lo menos, ganar tiempo declarando que la ofrecida condonación quedaba modificada. Este fue el objeto de la tercera medida de la repetida circular de 27 de julio, pensada, escrita e impresa con la mayor premura por la necesidad que se tenía de aprovechar uno de los raros conductos seguros que teníamos para comunicar con la capital.

Fortuna nuestra fue e increíble torpeza de nuestros contrarios, que se hubiesen puesto a publicar nuestras leyes en todos sus periódicos. Un supersticioso vería claro en esto el dedo de Dios y era necesario aprovechar, si fuese posible, el estúpido candor con que los periódicos de la capital se apresuraban a hacer llegar a noticia de todos los que, sin tan impensada como estulta cooperación, no sé cómo hubiéramos nosotros conseguido.

Posteriormente se aclaró más este punto de réditos por otra circular y en la aplicación práctica se ha tenido toda la consideración que merecían los deudores, a quienes ya se había dado un derecho con la promesa de condonación.

He tenido la satisfacción de ver que aun los mismos deudores que se han acercado a esta secretaría y a quienes por eso he tenido la ocasión de explicar las razones de esta alteración, han reconocido la justicia de ella y confesado, que si bien era ventajoso y, por lo mismo, uno de los alicientes para aprovecharse de la ley, el artículo 22 de que me ocupo, por un lado recordaba todas las flagrantes injusticias que hace poco referí y, por el otro y más generalmente, sólo beneficiaba a los que menos lo merecían, a los tramposos y a los negligentes.

También se va a volver de larga explicación el recuerdo que V. E. me permitirá hacerle de los motivos porque acordó que se declarara la disposición contenida en el cuarto párrafo de la repetida circular de 27 de julio.

Apenas llegado V. E. a esta ciudad y entrado yo al ministerio de Hacienda, por la separación que la falta de salud obligó al señor Prieto a hacer de él y de esta ciudad, cuando se recibieron en dicho ministerio, largas listas de denuncias de casas que se decían espontáneamente devueltas al clero por sus primeros adjudicatarios. Al dar cuenta a V. E. con esto, le hice presente la necesidad que había de impedirlo, entre otras razones, por la de que si se consentía llanamente en ir recibiendo como buenas estas denuncias, nada habría más fácil que dejar acumularse en manos de unos cuantos acaparadores grandes riquezas. Esto contradiría y nulificaría tanto el espíritu que la ley de 25 de junio de 1856 había tratado de introducir, como el de todo gobierno previsor y que quisiera ser benéfico debía conservar, sobre que la propiedad se repartiese en el mayor número posible de personas, que así se vuelven las más quietas y son los más seguros apoyos del orden público. En efecto, copiar las manifestaciones que los periódicos habían publicado en México, sobre la devolución que muchos beatos se apresuraban a hacer de bienes que aparentaban que sólo se habían adjudicado por defraudar la ley de 25 de junio y por conservarlos para el clero y en manos seguras contra el gobierno civil tales bienes, el copiar, digo, estas devoluciones espontáneas, estas confesiones de la mala fe con que se había procedido, reunir las en un pedazo de papel sellado y pedir en seguida derecho a su propiedad, sin más trabajo ni gastos, era, repito, una cosa muy cómoda para el que lo hacía, pero muy perjudicial para los demás. En estos demás, cuento principalmente al gobierno civil, que podía sacar alguna ventaja del derecho que de castigarlos le daban los defraudadores y cuento también, de un modo especial, las personas a quienes la ley concedía sustituirse en el lugar de los defraudadores y cuyos derechos eran también defraudados por las aspiraciones de los nuevos denunciante. Por poco que se hubiera impulsado por la simple tolerancia este nuevo giro que se daba a esos bienes, se habrían tenido en corto

tiempo gruesas sumas monopolizadas en las manos de ávidos especuladores, que a condiciones más onerosas que las habituales del clero, hubieran obligado a mayores sacrificios a todos los que hubiesen tenido después la necesidad de arrendar o de comprar tales bienes.

Consulté, pues, a V. E. y se dignó acordar que se diese la circular del 20 de agosto de 1858, en la que se cerraba la puerta a tales modos fáciles de adquirir derechos sobre esas propiedades y en la que ya se anunció que el gobierno de V. E. había de tomar sobre todos esos bienes nuevas disposiciones, como en efecto las tomó unos cuantos meses después.

En el párrafo cuarto de que me voy ocupando, se habla del pago de alcabalas por las nuevas denuncias de las fincas a cuyos derechos habían renunciado espontáneamente los primitivos adjudicatarios. Recordará también V. E. que fue éste el único retraente que me ocurrió oponer a los nuevos denunciadores y que V. E. lo aprobó reconociendo que no era infundada la interpretación que yo daba al artículo 10 de la ley de 25 de junio. Así pagaron en efecto las alcabalas de sus denuncias durante mi permanencia en el ministerio de Hacienda algunos de los que las presentaron y así las han pagado otros en el tiempo del señor Lerdo de Tejada, y aun en mi vuelta al mismo ministerio por la separación de él de este señor, con motivo de su comisión en los Estados Unidos.

Como este señor informé de palabra y por escrito a varias personas antes de la discusión de esta ley, durante ella y después de que S. E. y yo discrepábamos en varios puntos, suplico a V. E. me permita consignar aquí uno de los de estas diferencias de opinión, por venir al caso. Una de mis pretensiones era que los bienes ocupados se dividieran en dos o más categorías, bien distintas y fácilmente reconocibles. Por ejemplo, fincas adjudicadas o adjudicables por la ley de 25 de junio, capitales a censos reconocidos al clero antes de dicha ley, bienes dejados por los monacales suprimidos y que antes no habían sido adjudicados. Cuando ya se trató del viaje a los Estados Unidos, pronostiqué al señor Lerdo que la hipoteca que iba a ofrecer no era aceptable -pagarés de 40 meses sucesivos- y todavía le porfié por la división en categorías, algunas de las cuales se ofreciese aislada y sin gravámenes anteriores ni puntos

discutibles, como hipoteca de un préstamo. Volvió a rehusarlo y los hechos, si no son decisivos en favor de mi opinión sobre categorías, lo son sí en apoyo de mi predicción de que no encontraría fondo.

El párrafo quinto de la repetida circular de 27 de julio no tiene necesidad de explicaciones y pido a Dios que la amenaza que en él se hace a los especuladores que, sin pudor y sin conciencia, agitan nuestras discordias intestinas, para robar el Tesoro Público con pretexto de ellas, llegue alguna vez a tener efecto. El becerro de oro es el último Dios que le falta a la humanidad que combatir y desacreditar. Por fortuna se encuentran ya muchísimos que piensan que el dinero no es Dios y que si es útil para muchas cosas, nada tiene de respetable.

La última disposición de la circular es transitoria y de mero reglamento. Se quiso evitar en ella, como V. E. recordará, que cualquiera héroe que en México se pronunciara por la Constitución, hiciera en nombre de ella las economías que todos hemos visto que saben hacer para sí sobre el Tesoro Público.

La circular del 3 de agosto no necesita explicación particular; basta su lectura para comprender su justicia y su conveniencia y, en cuanto a oportunidad, sólo recordaré a V. E. que se dio en los días que estuvo aquí el señor Whitehead. Iba este señor a Londres, echado por Miramón y, con ocasión de haber sido uno de los que firmaron la representación que algunos ingleses hicieron, quejándose de los asesinatos de Tacubaya; se mostraba muy bien dispuesto a favor del gobierno de V. E.; en una conversación que con él tuve, vi que se podía aprovechar esta buena voluntad, no sólo en favor de los tenedores de bonos en Londres cuyo representante principal era él en México, sino también en beneficio del gobierno constitucional.

Deberé dejar al excelentísimo señor ministro de Justicia que explique los fundamentos de la circular de 4 del mismo agosto y acaso así lo hará, si V. E. se lo previene. Es por otra parte tan claro lo que en ella se dispone, que juzgo superflua toda explicación.

La circular de 12 de agosto, se ocupa únicamente de lo relativo a capitales y capellanías, punto sobre el que la ley dejaba mucho que desear para la debida claridad y distinción. Casi inútil me parecería

explicar cada uno de los puntos que tal circular contiene, por ser obvias las razones de justicia en que se fundan sus resoluciones; pero el acuerdo de V. E. sobre que todo lo relativo a las modificaciones de esta ley se explique y haga constar, me autoriza para procurar hacer lo que en esto pueda.

Las capellanías de sangre, como V. E. sabe, más que bienes dedicados al culto, eran beneficios que los parientes ricos solían fundar en provecho de los parientes pobres. El clero, cuyo prestigio era grande bajo muchos aspectos y merecido bajo el de permanencia en sus oficinas y giro de negocios, fue al principio, instintivamente y después por costumbre y conveniencia, electo como depositario de estas fundaciones o legados piadosos. El mismo clero, diestro como siempre lo ha sido en sacar ventajas para su clase de cuanto directa o indirectamente llegaba a tocarle o a rozarse con sus negocios, por darse mayor respetabilidad, no menos que por abrirse puerta por la cual pudiera, andando el tiempo, convertirse de depositario en dueño de tales fundaciones, inventó primero la cláusula que de ordinario se ponía en estas fundaciones, sobre que el titular las disfrutase a condición de ponerse en carrera de llegar a ser eclesiástico; después inventaron también, lo que entiendo que llamaron derecho devolutivo. Cualquiera creería, oyendo el nombre y sabiendo que a veces las fundaciones se hacían para parientes de las líneas laterales, que cuando éstas se extinguían, los bienes se devolvían a la línea del tronco. Pero no era así; derecho devolutivo quería decir, en este caso, a pesar de la gramática, de la lógica y de la justicia, el abuso por el cual los obispos continuaban haciendo uso de estas capellanías, pero en favor de sus paniaguados y a veces de sus parientes, porque el nepotismo se conserva casi intacto a pesar de los cánones y de la universal censura.

No siempre se perdía la capellanía, si pasada cierta edad no había ordenádose su titular; pero sí se perdía cuando éste se casaba, lo cual no es prueba de que la Iglesia procurase, como el gobierno civil, dar alicientes al matrimonio.

Recordado así lo que fueron las capellanías llamadas de sangre, el gobierno civil, al sustituirse al clero en esta depositaría, no podía hacerlo con el carácter de conquistador sin ofender todas las leyes de justicia, de

moral y aun de simple conveniencia. Era, pues, necesario en punto a capellanías, excluir antes que todo las laicas y éste es uno de los objetos de la circular de que ahora me ocupo, objeto que fue necesario volver a tratar y aclarar más, porque hubo algunos que no entendieron bien este punto tocado ya en la circular de 4 del mismo mes, dada por el excelentísimo señor ministro de Justicia.

El segundo punto de la circular del 12, es la petición a los censatarios de datos por los cuales se pudiera juzgar de la naturaleza y estado del capital a censo, puesto que la ley nada había dicho sobre varios puntos relativos a este artículo, que sin embargo merecían bien establecerse y aclararse. Sirvan de ejemplo las capellanías de sangre de que acabo de hablar y los capitales en que se conserven las dotes de las señoras religiosas que conforme a la ley tienen que dárseles.

Si no se continuaban en las manos de los mismos actuales censatarios estos últimos capitales, habría necesidad, para que el gobierno cumpliese la obligación que de ello tenía, de hacer nuevas imposiciones, con la desventaja de que, por cada 100 pesos que necesitara que se le reconociesen, tendría que exhibir más de 200, para demostrar lo cual basta recordar que de cada 100 pesos que hay obligación de pagarle ahora, sólo tiene que percibir poco más de 40 en efectivo. La operación, pues, se volvería ruinosísima si el gobierno no conservase todos los capitales que deben subsistir en poder de las mismas personas que tienen ya contraída la obligación de reconocerlos.

Para conseguir que así fuese, se previnieron los varios puntos que contiene la segunda disposición de la circular.

En cuanto a la tercera, V. E. creyó conveniente que se aplicara a las capellanías la ley de Cortes sobre desvinculaciones, así por ser racionales sus preceptos como por haber sido cumplida y bien recibida en su época.

Los dos párrafos 5ª y 6ª, que en la circular siguen, son de mero reglamento, pero necesarios para que el clero sepa que no puede poseer esta especie de beneficios que ahora se le dejan, sin conocimiento y expreso consentimiento del gobierno civil. Como juzgo éste uno de los medios eficaces para sujetar al clero, ya he tenido la honra de exponer a

V. E. cuán conveniente sería, en mi concepto, que se prorrogara el plazo de tres meses fijado en la circular, puesto que, debiéndose cumplir el 12 del próximo noviembre, aún no se presenta sino un muy corto número de capellanes pidiendo se les reconozca por el gobierno su título de tales. Podría acaso extenderse a seis meses más este plazo, atendida la dificultad que hoy tienen las disposiciones de V. E. para llegar a noticia de los interesados en los puntos que ocupa la reacción que, como ya otra vez he dicho, son los que más comúnmente habitan estos interesados.

El punto de réditos vuelve a ser tocado en esta nueva circular y se hace ya de ella la debida distinción entre los adeudados antes del 25 de junio de 1856 por capitales impuestos hasta entonces a censo y los que se adeuden en lo sucesivo por esos mismos capitales impuestos y por los bienes cuya adjudicación produjo la conversión de todos los bienes en capitales a censo. Es notoria la justicia de esta distinción, principalmente si se reflexiona la extremada incuria y la refinada malicia con que el clero dejaba a veces por negligencia, a veces por el deseo de ser árbitro de la suerte de las familias, dejaba, digo, que se recargasen los réditos hasta volverse a veces dobles o triples de los capitales.

Durante la primera guerra que México tuvo que sostener para adquirir su independencia, una parte de la fortuna pública se arruinó. Si se hubiese hecho en 1810 el inventario social de la llamada Nueva España y se hubiese comparado con otro igual en 1821, sin duda que se habría determinado la parte destruida, pero aun cuando tales valúos no se hayan hecho, sí es notoria tal destrucción parcial de la fortuna pública.

Parece que habiendo sido para mexicanos y por mexicanos el trabajo de la independencia, entre mexicanos debió repartirse el costo que había tenido el alcanzar ésta. Pero no fue así; el clero declaró por sus hechos, aunque sin atreverse a formularlo con palabras, que él no era mexicano, sino ciudadano de la Luna o de Saturno y que si bien le tocaba y aceptaba y disfrutaba con gusto los bienes de la independencia, las costas debían solamente lastarse por los hijos de Nueva España; que en consecuencia, sus capitales debían considerarse como intactos y que la disminución o destrucción parcial de parte del inventario social debía atribuirse solamente a los censatarios. Y luego vino la piedad de los

juzgados de testamentos, que en calidad de jueces y partes declararon, que era obra pía que los censualistas en nada contribuyesen al bien público del país y que los censatarios reportasen por sí solos éste que parece en justicia que debiera ser cargo común.

Por el solo decurso de estos 11 años, cuyo promedio importa 27 ½ por ciento al cinco anual, los censatarios quedaron gravados en un cuarto más de sus adeudos. Hablo del promedio y de lo que respectivamente puede llamarse uso, porque si hubiera de hablar del todo y del mayor abuso, el cuadro sería más sombrío.

Cuando no fuera, pues, sino por esta sola consideración, los réditos adeudados por los capitales reconocidos al clero antes de la ley de 25 de junio, debían merecer especial consideración y que no quiero hablar ni de las revoluciones subsecuentes, ni demás reflexiones de otra especie que de las ligeras indicaciones que siguen.

Vergüenza es decirlo, pero es cierto, para mengua de lo que entre nosotros se ha llamado administración de justicia y para baldón eterno de esos antros de ladrones que se llaman juzgados de testamentos, capellanías y obras pías; es cierto, repito, que las más claras disposiciones de nuestras leyes sobre prescripción fueron siempre eludidas por el clero y que los plazos de 10 y 20 años se redujeron siempre por el más notorio abuso de poder a la gran prescripción de 100 años llamada contra la Iglesia. Sería tan largo como triste, que refiriese yo menudamente siquiera la centésima parte de los casos de perturbación y aun ruina de las familias por este estudiado recargo que el clero dejaba hacer de parte de sus réditos. Basta recordar que el convencimiento que el clero había adquirido de ser el único árbitro de toda la propiedad del país y su insolente cinismo habían llegado hasta el punto de no dar a ninguno de los propietarios el título de tal, sino que a todos se dirija llamándolos simplemente poseedores. Tenía la conciencia de que no éramos más que administradores sin sueldo de sus bienes.

Era, pues, indispensable ser muy considerado respecto de los deudores de tales réditos y por eso dispuso V. E. que los anteriores al 25 de junio se pagasen con bonos. He explicado ya las buenas razones que había para no tener la misma consideración con los nuevos adjudicatarios

y, sin embargo y atendiendo a las que también había para considerarlos en algo, V. E. sabe que en la práctica ha habido bastante lenidad sobre el pago de estos últimos réditos.

La circular de 22 de agosto tiene por objeto reglamentar el artículo 32 de la ley, cuya simple lectura, si V. E. se digna volverla a hacer, convencerá a V. E. de que sobre este capítulo de señoras religiosas, no hay allí más que un germen confuso de lo que pudiera establecerse. Su práctica, atendida la letra, es de todo punto imposible y así debió sentir el excelentísimo señor gobernador del estado de Oaxaca, que pidió su aclaración.

Contiene además esta circular, la novedad de que si en algunos conventos los rendimientos de las fincas no bastaban al mantenimiento de las señoras, del Tesoro público se subviniese a él. Esta medida de verdadera filantropía que siempre recomendará a V. E. era, además de diestra, política, porque debía probar que no había encono ni animosidad de ninguna especie en el gobierno de V. E., como tanto se ha procurado propalar por sus detractores y malquerientes ni contra la religión, ni mucho menos contra las víctimas inocentes de uno de sus extravíos. Era, aunque muy remoto, posible, sin embargo, que las malas pasiones de los beatos, quienes por desgracia abrigan de las peores y más exacerbadas, llevasen a éstas hasta el extremo de negar las limosnas y demás medios comunes de subsistencia a las comunidades pobres, para excitar el fanatismo en unos y en todos mover contra el gobierno de V. E. la compasión, que naturalmente excitaría el saber la miseria a que estas pobres señoras llegaran a ser reducidas. V. E. sabe que el hombre se rige más por el sentimiento que por la reflexión. Cualquiera gravamen, pues, que se creyera que por éste debía venir al Tesoro público, era de casi ninguna importancia ante las razones de humanidad y conveniencia pública, que hacían necesaria tal medida.

La circular de 7 de septiembre no tiene necesidad de explicación, porque siendo buenas las razones que se tuvieron presentes en la circular de diciembre de 1856, que en ella se cita, basta su simple lectura para conocer la ventaja de recordar que estaba en vigor.

La circular de 10 de septiembre explica por sí misma la justicia y conveniencia de la disposición en ella tomada. Es principalmente de considerarse la respectivamente mala posición en que la ley puso a los censatarios anteriores a la ley de 25 de junio de 1856. En efecto, tener un capital al cinco o seis por ciento, que al seis eran pocos los que había, tenerlo aun en negocios como son las fincas rústicas y las casas de las poblaciones pequeñas, en negocios que dejan tan cortas utilidades habitualmente y que ninguna han dejado sino ruina en muchos puntos de la República, con motivo de la guerra larga y desoladora que el clero le ha procurado, era sin duda más ventajoso que tener que exhibir un 40 por ciento del mismo capital, aun cuando ese 40 se dividiera en otros tantos meses.

Muchísimos censualistas conozco, para quienes aún antes de esta guerra, era sumamente difícil pagar los cinco duodécimos mensuales por ciento que les correspondía por los antiguos capitales reconocidos al cinco. Con cuanta más razón no les debiera ser difícil y para algunos casi imposible, exhibir un poco más del uno por ciento mensual, que conforme a la ley tendría que pagar. Y digo un poco más, porque sea cual fuere el valor que se imponga a los bonos, dividido éste por los 40 meses, supera siempre en algo al uno que resulta de 40 por ciento dividido en 40 meses.

Vista la tendencia general de la ley, conocido el espíritu que la dictó y consultada la conveniencia pública sobre ello, es evidente para mí, que su carácter de recurso pecuniario debe subordinarse del todo ante un gran carácter de reforma social. Yo no quiero echarla de profeta, pero tal vez llegará V. E. a tener ocasión de ver que de los ponderados millones del clero, será bien poco lo que el gobierno civil llegue a aprovechar y aun a conocer, porque son también inferiores y con mucho a las exageraciones que de ellos se han hecho. De eso adolecía principalmente la ley de 25 de junio, de considerar como arbitrio lo que debiera ser reforma de la sociedad y de sacrificar al deseo de adquirir algunos recursos la suposición de que el clero era propietario de esos bienes, la mejora y saneamiento de ellos para él y el principio económico de que no debe hacerse ninguna imposición que hiera el capital.

Como último considerando, que suplico a V. E. me permita exponer sobre el objeto de esta circular, es que sin ella y sin la declaración de que los 30 días fijados por la ley para redimir debían correr desde la publicación oficial, el agio se hubiera interpuesto entre los que deberían ser beneficiados y el gobierno y unos cuantos pillos que de decentes no tienen más que el traje y las pretensiones, habrían sido los únicos que por contratos más o menos ruinosos hubieran aprovechado las leyes de desamortización y nacionalización, quedando así el gobierno que tal hubiera consentido con las notas de inepto o de inicuo; acaso con la de ladrones los que compusieron su personal y la República, con la esperanza perdida, de que alguna vez hubiese algo en México, que se hiciera sin más miras que las de la justicia y de la conveniencia pública.

Si he omitido algún otro informe, será sobre puntos que no tengan verdadero interés o secundarios y que no se han circulado a todos los estados, como los ya expuestos. A los de Zacatecas y Michoacán, que lo pidieron, se les ha dado por V. E. amplitud de facultades para llevar a efecto la ley y se han negado las mismas a los de Campeche y Durango aunque también la solicitaron, porque V. E. ha creído, que ni eran unas mismas las circunstancias de unos y otros, ni tampoco era idéntico con el de V. E. como parece que lo es el de los gobiernos de Michoacán y Zacatecas, el espíritu de los de Campeche y Durango.

En esta ciudad de Veracruz ha habido una particularidad que V. E. me permitirá consignar aquí. Pasados los 30 días de la ley, habían quedado sin redimir algunas casas, que conforme a la misma debieran ser rematadas en subasta pública. Supe, extraoficialmente, que en algunas de ellas se hacía esto con toda malicia, para tomarlas por las dos terceras partes del valúo y procuré impedir esta quiebra que no era por error en la primitiva adjudicación o por cualquiera otra causa excusable. Se consiguió colocarlas todas, aunque algunas con circunstancias más favorables a los adquiridores que las que tuvieron en el resto de ellas, pero ninguna con tanto gravamen como el que hubiera tenido el Tesoro público si se hubiesen sacado en diversas almonedas. El jefe de Hacienda nos ayudó en esto.

Es fácil que en los informes que he procurado dar a V. E. como opinión mía, cuando he tenido necesidad de consultarle todos estos puntos, haya incurrido en más de un error. Pido por ello a V. E. sincero perdón, como también lo necesito por la festinación con que en varios casos lo he molestado por resoluciones que creía yo no debían demorarse. V. E., con su acostumbrada bondad, se dignará disimular todo esto, en favor de la sana intención y de la eficacia y prontitud con que he procurado servir los varios cargos que V. E. ha tenido a bien encomendarme.

Acepte V. E. la renovación de mi muy sincero respeto a su persona y de mi más cordial atención.

Dios y Libertad. Heroica Veracruz, octubre 22 de 1859.

Melchor Ocampo

MANUEL RUIZ
APOYA A MELCHOR OCAMPO

México, febrero 15 de 1861

Señores redactores del *Monitor Republicano*

Suplico a ustedes inserten el siguiente artículo que he publicado en *La Tribuna*.

Soy de ustedes, atento q. s. m. b.

Manuel Ruiz

El artículo anterior que con fecha 31 del mes pasado dirigí a ustedes y que sólo tuvo por objeto ratificar las especies vertidas por el señor Ocampo, con relación a las opiniones del señor Lerdo, en materia de transacción con los reaccionarios o auxilio extranjero para impulsar a los defensores de la Constitución, ha dado lugar a que los señores redactores del *Heraldo*, sin presentar pruebas que destruyan los hechos que yo he referido o que desvirtúen los cargos que se han formulado entre el señor Lerdo, hayan apelado en defensa de una causa que no les pertenece al indecoroso recurso de injuriar a los anteriores ministros del gobierno constitucional, de negarles la importancia de sus trabajos y sacrificios y de presentar al señor Lerdo, como el único que en aquel gabinete pensó en la Reforma y con sus leyes dio vida a un gobierno que cualquiera hubiera tomado por un enfermo en la agonía.

Con los señores redactores del *Heraldo* es inútil toda discusión que tenga por objeto esclarecer hechos que ni han presenciado ni pueden

apreciar en justicia. Es inútil, además, porque en vez de la razón, única arma noble y decente para combatir en el terreno de la verdad, apelan al sarcasmo y a la injuria que, cuando menos, conduce a justificar que algo falta para ser dignos en la sociedad a los que por no tener justicia, se valen de tan reprobado medio. Por lo mismo, no entraré en discusión con dichos señores, dejaré al recto juicio de los hombres sensatos la pesada tarea de calificar sus escritos y me ocuparé solamente en demostrar el voluntario equívoco con que, no sin grave ofensa a la verdad y a mis dignos y antiguos compañeros, se aventuran a llamar al señor Lerdo, el único autor del pensamiento de Reforma y el mío también, que tuve la satisfacción de reducirlo a formas legales.

Mas, antes de entrar a la demostración, me permito por un efecto de justo sentimiento, decir a los señores redactores del *Heraldo* que ese gobierno constitucional que residió en Veracruz y a quien hoy, con notoria injusticia y marcada ingratitud pretenden despreciar, llamándolo "enfermo en agonía", fue entonces la única esperanza de la nación, el único que sostuvo con firmeza su dignidad y sus derechos; sin humillación y sin vacilaciones, ante el poder imponente de las naciones de Europa y ante la fuerza y la intriga de los reaccionarios. El que alentó con su constancia la fe incierta de los partidarios débiles y el que confirmó con su abnegación y sacrificios el valor y entusiasmo de los heroicos defensores del principio constitucional. No olviden estos hechos los señores redactores del *Heraldo* y tengan presente que ese enfermo en la agonía, pudo reconcentrar sus débiles fuerzas para ser munificente y noblemente generoso con los amigos perseguidos y arruinados que, asediándolo hasta en su lecho mortuario, allí le referían sus desgracias y le demandaban socorro. Recuerden, para su propia confusión, que ese enfermo agonizante no olvidó lo que debía a sus amigos y que, reanimándose, pudo extender una mano yerta y macilenta, pero surtida con centenares de pesos, para satisfacer la hambre y cubrir la desnudez de personas que gozando de robustez, lucían su vigor y su completa salud.

El respetable público ante quien escribo, se dignará disimular esta severa digresión en que he incurrido, para no dejar sin justo reclamo una

frase tan injuriosa como inmerecida, tan propia de los reaccionarios como ajena de los que de algún modo quieren llamarse partidarios del principio legal.

Entrando ya a la cuestión propuesta, me limitaré sencillamente a referir hechos que son notorios, que constan en documentos solemnes y que están en conocimiento del público.

Si incurso en alguna equivocación, si cometo algún error, dispuesto estoy a rectificarlo o a confesarlo ingenuamente. Extraño a la cuestión que tanto desvela al *Heraldo*, sobre persona determinada para que sirva la presidencia de la República, no me agita ningún sentimiento de interés que pueda extraviarme. Conforme en que se respete el derecho de la nación y en que se acate la ley, lo demás me es indiferente; sin embargo, no puedo, sin faltarme a mi mismo, que se lastime impunemente el honor de mis dignos compañeros y el mío, queriendo atribuir a un solo individuo del gabinete anterior la gloria y la satisfacción que a todos pertenece. No puedo convenir en que con agravio de la verdad, se enaltezca a uno y se humille a los demás; porque el uno y no los demás, cuenta con un imprudente apologista. No puedo guardar silencio cuando herido en el honor, veo que se falta a la justicia y se denigra a personas respetables que con su trabajo y sus sacrificios se han hecho dignas de consideración. Por tales causas me he resuelto a referir lo que la nación debe a cada uno de los miembros del gabinete constitucional que tuvieron parte en las leyes de Reforma, para que la nación misma falle con pleno conocimiento sobre la injusticia con que se pretende reconcentrar el honor y la gloria de tan sagrado trabajo a solo el pensamiento, el empeño y los afanes del señor Lerdo.

Nadie ignora que el memorable día 19 de enero de 1868 (sic) se instaló en Guanajuato el gobierno constitucional y que en febrero siguiente se trasladó a Guadalajara. En esa capital, por primera vez y cuando el señor Lerdo aún no formaba parte de aquel gabinete, se ha tomado en consideración la ocupación de los bienes llamados del clero. Reunido el gobierno para arbitrar recursos que dieran ese ser a su escasa hacienda, uno de los señores ministros propuso que de pronto se ocuparan, con arreglo a la ley de 5 de noviembre de 1857, los fondos

existentes en todas las casas de Moneda y que con los bienes llamados del clero se pagara a los propietarios el capital que se les ocupara y los réditos legales que venciera. Este proyecto se desechó en cuanto a la ocupación de los fondos existentes en las casas de Moneda y se remplazó con otro que imponía una contribución extraordinaria; pero, conforme el gabinete desde entonces en dar principio a la Reforma, comenzando por la ocupación de los bienes de la mano muerta y resuelto a aprovechar la primera oportunidad acordó, además, mandar al señor don José María Mata con el carácter de ministro plenipotenciario cerca del gobierno de los Estados Unidos, con instrucciones que estimó convenientes, entre los que llevaba la muy especial, la de procurar un préstamo de consideración con venta o hipoteca de los bienes llamados del clero. Este hecho que ni podrá negarse ni tergiversarse, porque se hizo constar en una acta y de él aún pueden dar testimonio los señores Degollado, Ocampo, León Guzmán y Prieto, que eran ministros, prueba de un modo concluyente que no es cierto, pero ni siquiera posible, que el señor Lerdo llevara el primero el pensamiento de la Reforma al gabinete constitucional, cuando en esta época aún no formaba parte de aquél y además se encontraba oculto en esta capital y hasta con las comunicaciones interrumpidas.

Ahora que este hecho se conoce, podrá en confirmación preguntarse: ¿Cómo pudo el señor Lerdo estando en México llevar a Guadalajara el pensamiento de la Reforma? ¿Cómo pudo indicarlo el primero en el seno de una corporación a la que aún no pertenecía? De ningún modo. Luego es evidente que no puede llamársele autor de aquél, sin faltar a la verdad y a la justicia.

La misma falta a la verdad y a la justicia, entiendo que se comete llamando al señor Lerdo autor del pensamiento de la Reforma iniciado a la nación después que ésta destruyó la administración tiránica del general Santa Anna. Antes es muy sabido que entre otros lo había anunciado el doctor Mora y que el patriarca de la libertad, don Valentín Gómez Farias, lo había reducido a formas legales en su memorable ley de 11 de enero de 1847. Prescindiendo de estos antecedentes en que no figura el señor Lerdo y restringiéndome a la época en que triunfante el plan de Ayutla, se dio principio a la Reforma, diré que el señor Juárez y no el señor

Lerdo fue el primero que inició la Reforma tocando con mano firme el coloso de tres siglos, suprimiéndole el fuero y arrancando de sus tribunales la jurisdicción civil. El que presume que faltó a la verdad, puede refrescar la memoria recordando la historia de la época a que me refiero y desvanecer su duda con la lectura de la célebre ley de justicia expedida en 23 de noviembre de 1855.

Lo expuesto basta para demostrar que el señor Lerdo ni fue el primero que llevó al gabinete constitucional el pensamiento de Reforma, ni fue tampoco el primero que lo inició a la nación. Si en esto hay gloria y gloria inmortal, esa gloria y esa inmortalidad no pertenecen al señor Lerdo. Veamos ahora cuáles fueron sus trabajos en la formación de las leyes de Reforma.

Diez leyes forman hasta hoy el Código de la Reforma. Me permito citarlas por su orden cronológico, designando a sus respectivos autores para mayor claridad.

1ª- La de 23 de noviembre de 1855, que quitó el fuero a los eclesiásticos y a sus tribunales la jurisdicción civil. Obra del señor Juárez que la autorizó como ministro de Justicia.

2ª- La de 25 de junio de 1856, sobre desamortización de los bienes llamados del clero. Obra del señor Lerdo que la autorizó como ministro de Hacienda.

3ª- La de 12 de julio de 1859, sobre nacionalización de los bienes llamados del clero, exclaustación de regulares, etc., etc. Obra del que suscribe que la autorizó como ministro de Justicia.

4ª- La de 13 de julio de 1859, que sirve de reglamento a la anterior. Obra del señor Lerdo que la autorizó como ministro de Hacienda.

5ª- La de 23 de julio de 1859, sobre matrimonio civil. Obra del que suscribe, que la autorizó como ministro de Justicia.

6ª- La de 28 de julio de 1859, sobre registro civil. Obra del señor Ocampo que la autorizó como ministro de Gobernación.

7ª- La de 31 de julio de 1859, sobre panteones y cementerios. Obra del señor Ocampo que la autorizó como ministro de Gobernación.

8ª- La de 11 de agosto de 1859, sobre supresión de días festivos. Obra del señor Ocampo que la autorizó como ministro de Gobernación.

9ª- La de 4 de diciembre de 1860, sobre cultos. Obra del señor (de la) Fuente, que la autorizó como ministro de Justicia.

10ª- La de 5 de febrero del corriente, que sirve de nuevo reglamento a la de 12 de julio de 1859. Obra del señor Prieto que la autorizó como ministro de Hacienda.

Como se ve, de estas 10 leyes, sólo dos fueron formuladas y autorizadas por el señor Lerdo. Y ¿podrá llamarse racionalmente autor de las Leyes de Reforma al que sólo formuló dos de ellas? Dos y tal vez las menos felices; digo las menos felices, a pesar de que sólo me proponía citar hechos, porque no puedo dejar de creer como acaso demostraré alguna vez, que si otro hubiera sido el pensamiento de la ley de 25 de junio de 1856 y otro el plan de la de 13 de julio de 1859, no es difícil que entonces nos hubiéramos ahorrado las desgracias de tres años y hoy no se encontrarán en grave conflicto muchas personas para hacer la redención de sus capitales. ¿Por qué, a pesar de tan perentoria prueba, se asegura que el señor Lerdo es el único que en el gabinete constitucional trabajó y que con sus leyes de Reforma, dio vida a un gobierno que cualquiera hubiera tenido por un enfermo en agonía? ¿Con qué derecho o por qué principio de justicia se desconocen nuestros trabajos? ¿Se ha podido creer que fuimos como ministros unos autómatas miserables que recibimos las obras del señor Lerdo y que estampamos en ellas nuestros nombres, deshonorando así el elevado puesto que ocupábamos, en vez de cumplir nuestro deber o abandonar los encargos que no éramos capaces

de servir? Para presunciones tan infamantes, para calificaciones tan torpes, sobra en el que las hace, la ligereza y la audacia, pero falta en él mismo, el entendimiento y el juicio. Increíble parece que personas ilustradas que se dan el título de amigos del señor Lerdo, hayan elegido para sostener su candidatura a la presidencia de la República, fundamentos tan débiles y seguido un camino tan lleno de escombros. ¿Qué no encontraron en la carrera pública del señor Lerdo bastante mérito y antecedentes para recomendarla, apoyándose en hechos que estuvieran exentos de reproche? ¿Se pudo esperar que los antiguos compañeros del señor Lerdo, sufrieran impasibles y en silencio que se les arrojara a la cara esa mancha de oprobio y de baldón? El mismo señor Lerdo, como hombre de honor y conciencia, reprobará esa falta de tino y acierto en la elección de los medios, porque él mismo no podrá negar jamás los trabajos y los sacrificios de sus antiguos compañeros, puesto que fue testigo de ellos.

Aquí debería terminar este artículo, porque considero que lo expuesto basta para demostrar el objeto que me propuse; pero, deseando que los hechos ocurridos en la discusión y formación del manifiesto del gobierno constitucional y sus Leyes de Reforma sean perfectamente conocidos para que puedan ser justamente calificados, me extenderé en referirlos.

Uno de los biógrafos del señor Lerdo ha dicho que el manifiesto del gobierno constitucional fue escrito por el señor Lerdo en Zacatecas y presentado en Veracruz al señor presidente y a sus ministros, como condición para aceptar la carteras de Hacienda y Fomento que desde luego se le encomendaron. No hay exactitud entre este relato y el hecho tal cual pasó.

El señor Lerdo, luego que llegó a Veracruz visitó al señor presidente y le ofreció sus servicios. El señor presidente aceptó gustoso la oferta y le mandó el nombramiento de ministro de Hacienda, con encargo de despachar la secretaría de Fomento. El señor Lerdo, después de haber aceptado el nombramiento y ya con el carácter de ministro, manifestó al señor presidente que tenía formados algunos apuntes sobre varios asuntos de público interés y que deseaba que, reunidos, los

viéramos y acordáramos respecto de ellos lo que nos pareciera conveniente. El señor presidente defirió (sic) a tan justa demanda; nos reunimos y se leyeron los apuntes. Concluida la tarea, en una conferencia franca y leal, se le manifestó que, en lo general, veíamos consignados en aquellos, nuestras mismas ideas; pero que en algunos puntos especiales, teníamos otras que no dudábamos serían de su agrado. Entre los diversos puntos de diferencia había dos esenciales y respecto de esto se habló largamente. El señor Lerdo en sus apuntes establecía la dotación del culto y del clero y la intervención de la autoridad civil en los asuntos eclesiásticos. El señor presidente y sus ministros que, en otras varias conferencias habían dilucidado estas cuestiones y que respecto de ellas, habían aceptado el pensamiento de la independencia absoluta entre la Iglesia y el Estado, pensamiento enunciado y sostenido por el señor presidente, manifestaron las razones que tenían para no estar conformes con la dotación del culto, etc., etc. La conferencia se extendió a otros pormenores y concluyó, por entonces, acordándose que continuarían las reuniones para seguir tratando tan importantes asuntos, hasta que todos quedaran perfectamente esclarecidos.

Poco después de este suceso el señor Lerdo reformó sus apuntes consignando en ellos el pensamiento de independencia de ambas potestades, iniciado por el señor presidente y las ordenó en forma de circular, que sin previo acuerdo del señor presidente ni combinación con sus ministros, mandó tirar a la imprenta. Luego que el señor presidente supo que la imprenta se ocupaba de tirar ese documento, mandó llamar al señor Lerdo. Ambos conferenciaron solos. No sé lo que en esta conferencia ocurrió; pero el resultado fue que la circular no se expidió y que, según presumo, el mismo señor Lerdo recogió los ejemplares impresos. De éstos llegó casualmente uno a mis manos que aún conservo.

Transcurrido algún tiempo, el excelentísimo señor general en jefe del ejército federal, don Santos Degollado, que sabía desde cuándo existía en el gabinete constitucional el pensamiento de la Reforma; que le constaba que éste sólo esperaba una feliz oportunidad; que en lo amistoso y reservado había visto el proyecto de la Ley de Reforma que hoy tiene fecha 12 de julio y que desde el interior ya había escrito, manifestando

que podía ser conveniente la promulgación de la ley, porque en toda aquella parte de la nación se dejaba sentir la necesidad de la Reforma, se presentó en Veracruz para dar personalmente mejores informes y habiéndolos rendido extensamente y determinado el ánimo del excelentísimo señor presidente para obrar, S. E. acordó que de nuevo se reuniera el gabinete para tratar la cuestión.

Reunido al efecto, el señor presidente propuso que ante todas cosas se examinara:

1º- El derecho con que la Iglesia había adquirido los bienes que administraba el clero.

2º- El derecho que la nación tuviera a esos bienes, especialmente después de la ley de 25 de junio de 1856, que los había declarado propiedad del clero.

El señor presidente, al enunciar estas cuestiones manifestó que las proponía porque ni quería que se cometiera por ligereza un acto de injusticia que después de un detenido examen reprobara la conciencia, ni quería tampoco que se usara de un derecho que no fuera perfecto, legítimo y propio de la autoridad nacional. El señor Juárez, antiguo y acreditado jurisconsulto, maestro muchos años de derecho canónico y conocedor de la historia y ciencias eclesiásticas, presentó estas cuestiones con precisión y claridad para ilustrarlas y definirlas, en términos de derecho y justicia, con el fin de destruir hasta la más pequeña duda y de tranquilizar hasta la conciencia más timorata. La discusión sobre estos puntos fue erudita, luminosa y digna, terminando por ser justa y arreglada al derecho eminente de la soberanía nacional.

El mismo señor presidente propuso las cuestiones de oportunidad y recursos, manifestando que era necesario medir con exactitud la situación para no dejar por una parte inútiles las leyes o por otra en terrible conflicto a nuestras fuerzas, tomando en consideración el estado de división en que se hallaba el país y los escasos recursos de la hacienda federal. Estas cuestiones se dilucidaron con franqueas con lealtad, con

patriotismo y sirvió de mucho para definir las el extenso informe del señor Degollado, sobre el estado de la opinión pública en el interior y el del señor Lerdo sobre el de la Hacienda Federal.

Zanjadas estas dificultades de derecho y de hecho, seguros todos de que en conciencia y conforme a nuestro deber, nada más se debía esperar ni considerar, se acordó dar un manifiesto a la nación y expedir desde luego las Leyes de Reforma. Entonces fue cuando, trayendo de nuevo a la vista los apuntes primitivos del señor Lerdo, rectificados y enmendados ya, en el sentido de la primera discusión y enriquecidos con el pensamiento del señor Juárez, sobre absoluta independencia entre la Iglesia y el Estado y sobre la no intervención de la autoridad civil en asuntos eclesiásticos, se tomaron en consideración y con algunas modificaciones sirvieron para formular el manifiesto del gobierno constitucional, cuya redacción se confió al señor Lerdo.

Las diferencias que existen entre los primeros apuntes del señor Lerdo, la circular que pretendió expedir y el manifiesto referido, sólo pueden notarse teniendo a la vista los documentos; pero es indudable que existen y el *Heraldo* mismo así lo expresa, cuando al mencionar la circular dijo que, con poca diferencia, ella era el manifiesto del gobierno constitucional.

Al día siguiente presentó el que suscribe, como ministro de Justicia, el proyecto de la ley que hoy corre con la fecha de 12 de julio. Puesto a discusión, se aprobó un artículo en que, el que firma, por razones que no es del caso referir, fundaba una excepción en favor de los religiosos mendicantes de la orden de San Francisco. Se modificó otro en que se designaba a los regulares exclaustros que acataran la ley, la suma de \$3,000 por una sola vez. Este artículo sufrió larga discusión porque el señor Lerdo sostenía que nada debía dárseles y después de un día de debates entre esta opinión y la del autor, se adoptó el medio que aparece consignado en el artículo 8º de la ley de 12 de julio.

Los demás artículos fueron aprobados con ligeras modificaciones. Aprobada la ley se acordó su impresión y el señor Lerdo me ofreció que él se encargaría de arreglarla con el mismo impresor que había tirado el manifiesto para que saliera de un mismo tamaño y de un mismo carácter

de letra. Yo acepté su bondadosa oferta recomendándole previniera que se me llevaran las pruebas para corregirlas. Así se verificó.

Al día siguiente el señor Lerdo presentó el proyecto de la ley de 13 de julio, que sirve de reglamento a la anterior. Se leyó y descansando todos en que era asunto que tenía bien meditado y perfectamente combinado, como varias veces nos lo había asegurado, sólo se hizo una que otra reflexión y se aprobó. Acto continuo se imprimió y mandó publicar pero el señor Lerdo que deseaba solicitar recursos de los Estados Unidos y que creía que, llevando personalmente las primeras Leyes de Reforma los podría conseguir, acordó con el señor presidente su viaje y se marchó.

Después de la separación del señor Lerdo se dieron las demás Leyes de Reforma que faltaban, comenzando por la de 23 de julio sobre matrimonio civil y, como ya en esa fecha el señor Lerdo estaba en los Estados Unidos, no tuvo en ninguna de ellas participio alguno.

Cuanto hasta aquí he referido, no es más que la simple y sencilla relación de lo ocurrido en este grave asunto. Es la historia exacta de las Leyes de Reforma. Por ella se viene en conocimiento de que no fue el señor Lerdo la persona que primero llevó al gabinete el pensamiento de Reforma, porque este pensamiento existía antes de que fuera miembro de aquél. No fue él que formuló todas las Leyes de Reforma, porque a sus luces sólo se confió el manifiesto del gobierno constitucional, enriquecido con dos pensamientos del señor Juárez y en su calidad de ministro solamente expidió la ley de 13 de julio; asistió a la discusión de la ley de 12 y no a las demás, porque a la fecha de su formación, discusión y promulgación, ya se encontraba fuera de la República.

Por estos antecedentes que no son conocidos al *Heraldo*, entiendo que incurrió en el error de llamar sin justicia al señor Lerdo, el único que en el gabinete constitucional, pensó en la Reforma, y el único autor de las leyes que llevan el mismo nombre.

Ahora podrá desvanecer su equívoco y confundirse al recordar la manera dura con que, fiado en informes inexactos, ha querido deturpar a los miembros del gabinete constitucional.

Mas, si no rectifica su juicio, si continúa por la senda extraviada que adoptó sin conocimiento de los hechos, puede continuar también su mismo sistema. Diga en buena hora que la envidia y la enemistad por una parte -calumnia que jamás justificará-, y que por otra que la amistad y la gratitud me han obligado a escribir. Declame en el sentido que más colme su deseo. Yo, tranquilo, contestaré con el silencio porque de hechos sólo pueden disputar los que los conocen y relegaré al desprecio las injurias, porque el que contesta injurias se deshonra.

Manuel Ruiz